

REPUBLICA ARGENTINA

# DIARIO DE SESIONES

## CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

18ª REUNIÓN – 12ª SESIÓN ORDINARIA – 20 DE MAYO DE 1998

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, doctor CARLOS F. RUCKAUF  
y del señor presidente provisional del H. Senado, doctor EDUARDO MENEM

Secretarios: doctor EDGARDO R. PIUZZI y doctora MATILDE DEL VALLE GUERRERO

Prosecretarios: señor MARIO L. PONTAQUARTO, señora BERTA ALDALUR,  
doctor ALFREDO A. LUQUES y señor TAHA AHMAD

### PRESENTES:

AGUIRRE LANARI, Juan R.  
AGÚNDEZ, Jorge A.  
ALASINO, Augusto  
AVELÍN, Alfredo  
BARTOLUCCI, Mario L.  
BAUM, Daniel  
BAUZÁ, Eduardo  
BERHONGARAY, Antonio T.  
BRAVO, Leopoldo  
CABANA, Fernando F.  
CAFIERO, Antonio F.  
CANTARERO, Emilio Marcelo  
COSTANZO, Remo J.  
DE LA ROSA, Carlos L.  
DE LA SOTA, José Manuel  
DEL PIERO, Pedro  
FIGUEROA, José O.  
GAGLIARDI, Edgardo  
GALVÁN, Raúl A.  
GARCÍA ARECHA, José M.  
GENOUD, José  
GIOJA, José L.  
HUMADA, Julio C.  
LEÓN, Luis A.  
LÓPEZ, Alcides H.  
LOSADA, Mario A.  
LUDUEÑA, Felipe E.  
MAC KARTHY, César  
MAGLIETTI, Alberto  
MANFREDOTTI, Carlos  
MARANGUELLO, Pedro C.  
MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique M.  
MASSACCESI, Horacio  
MASSAT, Jorge  
MAYA, Héctor M.

MELGAREJO, Juan I.  
MENEHINI, Javier R.  
MENEM, Eduardo  
MIRANDA, Julio  
OUDÍN, Ernesto  
OYARZÚN, Juan C.  
PARDO, Angel F.  
PEÑA de LÓPEZ, Ana M.  
PRETO, Ruggero  
REUTEMANN, Carlos A.  
RIVAS, Olijeta del Valle  
ROMERO FERIS, José A.  
SÁEZ, José María  
SAGER, Hugo Abel  
SALUM, Humberto E.  
SAN MILLÁN, Julio A.  
SAPAG, Felipe R.  
SOLANA, Jorge D.  
STORANI, Conrado H.  
TELL, Alberto Máximo  
ULLOA, Roberto Augusto  
USANDIZAGA, Horacio Daniel  
VAQUIR, Omar M.  
VARIZAT, Daniel A.  
VERNA, Carlos Alberto  
VILLARROEL, Pedro G.  
VILLAYERDE, Jorge A.  
YOMA, Jorge R.  
ZALAZAR, Horacio Aníbal

### AUSENTES, CON AVISO:

ALMIRÓN, Carlos H.  
BRANDA, Ricardo A.  
MOREAU, Leopoldo R. G.  
SALA, Osvaldo R.

### POR SUSPENSION:

ANGELOZ, Eduardo C.

## SUMARIO

1. Por invitación del señor vicepresidente de la Nación, el señor senador por Córdoba doctor José M. de la Sota, procede al izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto. (Pág. 2880.)

## 2. Homenajes:

I. Al doctor Manuel Antonio González. Consideración de un proyecto de declaración (S.-779/98). Se aprueba. (Página 2880.)

II. Al 407º aniversario de la fundación de la ciudad de La Rioja. (Pág. 2880.)

## 3. Asuntos entrados:

I. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la designación del señor Enrique J. de la Torre como embajador extraordinario y plenipotenciario, categoría "A" (P.E.-105/98). (Pág. 2881.)

II. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la designación de la señora Nora L. Jaureguiberry como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, categoría "A" (P.E.-106/98). (Pág. 2881.)

III. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la designación del señor Santos Goñi Marengo como embajador extraordinario y plenipotenciario, categoría "A" (P.E.-107/98). (Página 2881.)

IV. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la designación del señor Jorge M. Faurie como embajador extraordinario y plenipotenciario, categoría "A" (P.E.-108/98). (Pág. 2882.)

V. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la designación del señor José M. Castellano como embajador extraordinario y plenipotenciario, categoría "A" (P.E.-131/98). (Página 2882.)

VI. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la designación del señor Adolfo E. Nancelares como embajador extraordinario y plenipotenciario, categoría "A" (P.E.-132/98). (Página 2882.)

VII. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la designación del señor Rodolfo L. Rodríguez como embajador extraordinario y plenipoten-

ciario, categoría "A" (P.E.-133/98). (Página 2882.)

VIII. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la designación del señor Alfredo Raúl Morelli como embajador extraordinario y plenipotenciario, categoría "A" (P.E.-134/98). (Página 2882.)

IX. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la designación del señor Eduardo A. Sadous como embajador extraordinario y plenipotenciario, categoría "A" (P.E.-135/98). (Página 2883.)

X. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la designación del señor Sebastián L. Brugo Marco como ministro plenipotenciario de primera clase, categoría "B" (P.E.-120/98). (Pág. 2883.)

XI. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la designación del señor Carlos D. Arzani como ministro plenipotenciario de primera clase, categoría "B" (P.E.-121/98). (Página 2883.)

XII. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la designación del señor Gustavo A. Moreno como ministro plenipotenciario de primera clase, categoría "B" (P.E.-122/98). (Página 2883.)

XIII. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la designación del señor Juan J. Iriarte Villanueva como ministro plenipotenciario de primera clase, categoría "B" (P.E.-123/98). (Pág. 2883.)

XIV. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la designación del señor Fernando L. Nebbia como ministro plenipotenciario de primera clase, categoría "B". (P.E.-124/98). (Página 2884.)

XV. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la designación del señor Felipe Frydman como ministro plenipotenciario de primera clase, categoría "B" (P.E.-125/98). (Pág. 2884.)

XVI. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la designación del señor Miguel A. Velloso como ministro plenipotenciario de primera clase, categoría "B" (P.E.-126/98). (Página 2884.)

gimen para la protección de animales (S.-777/98). (Pág. 3021.)

- CXL. Proyecto de declaración del señor senador Romero Feris por el que se adhiera a la conmemoración del centenario de la primera cátedra de Sociología en nuestro país (S.-778/98). (Pág. 3025.)
- CXLI. Proyecto de declaración del mismo señor senador por el que se expresa satisfacción por la institución del "Premio Dr. Manuel Antonio González" a la investigación cardiovascular (S.-779/98). (Pág. 3026.)
- CXLII. Proyecto de comunicación del señor senador Maglietti por el que se solicitan informes acerca de hechos de violencia en espectáculos futbolísticos (S.-780/98). (Pág. 3026.)
- CXLIII. Proyecto de declaración de los señores senadores Avelín y Bravo por el que se expresa preocupación por las consecuencias de la construcción de los diques Caracoles y Punta Negra para pobladores del Valle de Calingasta, San Juan (S.-781/98). (Pág. 3027.)
- CXLIV. Proyecto de comunicación del señor senador Cantarero por el que se solicita una partida presupuestaria para la construcción de un puente carretero en el paraje Zanja Honda sobre la ruta nacional 34 en San Martín, Salta (S.-782/98). (Pág. 3028.)
- CXLV. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicita una prórroga por parte del Banco de la Nación Argentina, filial Salta, para la refinanciación de deudas (S.-783/98). (Pág. 3029.)
- CXLVI. Proyecto de declaración del señor senador Ludueña por el que se declara de interés legislativo al Congreso Internacional de Derecho Rural y de los Recursos Naturales (S.-784/98). (Página 3029.)
- CXLVII. Proyecto de declaración del señor senador Ulloa por el que se solicita la ejecución del nuevo puente sobre la ruta nacional 34 en el paraje Zanja Honda, Salta (S.-785/98). (Pág. 3030.)
- CXLVIII. Proyecto de ley del señor senador Humada por el que se modifica la ley de tráfico de estupefacientes sobre limitación de la información obtenida por el levantamiento del secreto bancario (S.-786/98). (Pág. 3031.)

CXLIX. Proyecto de comunicación del señor senador Usandizaga, por el que se solicita asistencia técnica para la construcción del gasoducto Venado Tuerto-Rufino, Santa Fe (S.-787/98). (Pág. 3033.)

CL. Proyecto de declaración del mismo señor senador por el que se expresa beneplácito por la realización de la Exposición Internacional del Mercado Eléctrico Argentino EIME 98 Latin America Power 98 (S.-788/98). (Página 3033.)

4. Plan de labor para la sesión de la fecha. Se aprueba. (Pág. 3034.)
5. Por indicación de la Presidencia se pasa a cuarto intermedio para constituir la Cámara en Tribunal de Juicio Político. (Pág. 3036.)
6. Continúa la consideración en general del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre Reforma Laboral (P.E.-16/98). (Pág. 3036.)
7. A moción del señor senador Agúndez se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de resolución del que es autor junto con el señor senador Bartolucci por el que se declara de interés cultural el VII Encuentro Nacional Anual de Pintores Paisajistas. (Pág. 3044.)
8. Continúa la consideración del proyecto al que se refiere el punto 6 de este sumario. Se aprueba. (Pág. 3044.)
9. Consideración del dictamen de las comisiones de Transportes y de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de ley en revisión por el que se crea el Ente Coordinador del Transporte Metropolitano (ECOTAM) (CD 76/97). Se aprueba. (Pág. 3062.)
10. Consideración del dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en los expedientes Oficiales Varios 464/96 y 981/96 por los que la Auditoría General de la Nación remite resoluciones respecto de la verificación de controles sobre la ejecución de obras en la vía pública por parte de la concesionaria del servicio (período auditado: enero de 1993 a octubre de 1995) y sobre verificación de controles realizados en la calidad del servicio y producto técnico sobre la provisión del agua potable (período auditado: 2º año de la concesión, 1º de mayo de 1994 y el 30 de abril de 1995), respectivamente. Se aprueba. (Pág. 3066.)
11. Consideración del dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Pesca, Intereses Marítimos y Portuarios y de Recursos Hídricos en el mensaje y proyecto de ley del Po-

**Sr. Alasino.** — Señor presidente: ¿estamos hablando del proyecto de la Comisión de Transportes?

**Sr. Presidente.** — Sí, señor senador.

**Sr. Alasino.** — Lo vamos a tratar, señor senador.

**Sr. Presidente.** — El pedido del señor senador por la Capital es que se trate como primer tema luego del Orden del Día N° 288 y Anexo, que es el que tenemos pactado tratar como continuación de la sesión anterior.

Si hay acuerdo, se va a votar el plan de labor con esa modificación.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Queda aprobado el plan de labor.

## 5

### CUARTO INTERMEDIO

**Sr. Presidente.** — Pasamos a cuarto intermedio para constituir la Cámara en Tribunal de Juicio Político.

—Son las 17 y 21.

—A las 17 y 58:

**Sr. Presidente.** — Continúa la sesión.

## 6

### REFORMA LABORAL

(Continuación)

**Sr. Presidente.** — Corresponde continuar con la consideración en general del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre Reforma Laboral. (Orden del Día N° 288 y Anexo)

Por Secretaría se dará lectura.

**Sr. Secretario (PiuZZi).** — (Lee)

Dictamen de comisión en mayoría

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha considerado el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo nacional (16/98), sobre Reforma Laboral; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente

#### PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

#### CAPÍTULO I

Artículo 1° — *Contrato de trabajo de aprendizaje.* El contrato de aprendizaje tendrá finalidad formativa teó-

rico-práctica, la que será descrita con precisión en un programa adecuado al plazo de duración del contrato. Se celebrará por escrito entre un empleador y un joven sin empleo, de entre quince (15) y veinticho (28) años.

Este contrato de trabajo tendrá una duración mínima de tres (3) meses y una máxima de un (1) año.

A la finalización del contrato el empleador deberá entregar al aprendiz un certificado suscrito por el responsable legal de la empresa, que acredite la experiencia o especialidad adquirida.

La jornada de trabajo de los aprendices no podrá superar las cuarenta (40) horas semanales, incluidas las correspondientes a la formación teórica. Respecto de los menores se aplicarán las disposiciones relativas a la jornada de trabajo de los mismos.

No podrán ser contratados como aprendices aquellos que hayan tenido una relación laboral previa con el mismo empleador. Agotado su plazo máximo, no podrá celebrarse nuevo contrato de aprendizaje respecto del mismo aprendiz.

El número total de aprendices contratados no podrá superar el diez por ciento (10%) de los contratados por tiempo indeterminado en el establecimiento de que se trate. Cuando dicho total no supere los diez (10) trabajadores será admitido un aprendiz. El empresario que no tuviere personal en relación de dependencia también podrá contratar un aprendiz.

El empleador deberá preavisar con treinta (30) días de anticipación la terminación del contrato o abonar una indemnización sustitutiva de medio mes de sueldo.

El contrato se extinguirá por cumplimiento del plazo pactado; en este supuesto el empleador no estará obligado al pago de indemnización alguna al trabajador sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior. En los demás supuestos regirá el artículo 7° y concordantes de la presente ley.

Si el empleador incumpliera las obligaciones establecidas en esta ley, el contrato se convertirá a todos sus fines en un contrato por tiempo indeterminado.

Las cooperativas de trabajo y las empresas de servicios eventuales no podrán hacer uso de este contrato.

Art. 2° — *Régimen de pasantías.* Cuando la relación se configure entre un empleador y un estudiante y tenga como fin primordial la práctica relacionada con su educación y formación, se configurará el contrato de pasantía.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social establecerá las normas a las que quedará sujeto dicho régimen.

Art. 3° — Sustitúyese el artículo 92 bis del Régimen de Contrato de Trabajo (ley 20.744, t.o.) por el siguiente texto:

Artículo 92 bis: *Período de prueba.* El contrato de trabajo por tiempo indeterminado se entenderá celebrado a prueba durante los primeros treinta (30) días. Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa y sin derecho a indemnización alguna con motivo de la extinción.

El período de prueba se regirá por las siguientes reglas:

1. Un mismo trabajador no podrá ser contratado a prueba por el mismo empleador más de una vez.
2. El empleador deberá registrar el contrato a prueba en el libro especial de artículo 52 de esta ley o, en su caso, en el previsto por el artículo 84 de la ley 24.487.
3. Durante el período de prueba el trabajador tendrá los derechos y obligaciones propios de la categoría o puesto de trabajo que desempeñe, incluidos los derechos sindicales, con las excepciones que se establecen en este artículo.
4. Durante los primeros treinta (30) días el empleador y el trabajador estarán obligados al pago de los aportes y contribuciones para las obras sociales, asignaciones familiares y cuota correspondiente al régimen vigente de riesgo del trabajo y, exentos de los correspondientes a jubilaciones y pensiones, Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y Fondo Nacional de Empleo.
5. El trabajador tendrá derecho durante el período de prueba a las prestaciones por accidente o enfermedad del trabajo, incluidos los derechos establecidos para el caso de accidente o enfermedad inculpaible, con excepción de lo prescrito en el cuarto párrafo del artículo 212 de esta ley.
6. Si el contrato continuara luego del período de prueba, éste se computará como tiempo de servicio a todos los efectos laborales y de la seguridad social.

Podrá ampliarse el período de prueba hasta seis (6) meses por convenio colectivo debidamente homologado.

Si se dispusiere la extensión convencional del período de prueba deberán realizarse, a partir del segundo mes, todos los aportes y contribuciones legales y convencionales, rindiendo las normas generales en materia de indemnización y preaviso. La disponibilidad colectiva de las indemnizaciones por falta de preaviso y por antigüedad en el despido incausado será de hasta el cincuenta por ciento (50 %) del régimen general.

Art. 4º — Los contratos de trabajo en período de prueba que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley se hallaren en curso, continuarán hasta su finalización conforme al régimen en el cual tuvieron origen.

A partir de la vigencia de esta ley se aplicará, en todos los casos, este nuevo régimen, salvo que un convenio colectivo posterior a su sanción establezca uno distinto, dentro de los márgenes de disponibilidad colectiva.

## CAPÍTULO II

Art. 5º — Las disposiciones del presente capítulo serán de aplicación a los contratos de trabajo que se celebren a partir de la entrada en vigencia de esta ley. Sin perjuicio de ello, se les aplicarán también todas las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales que no sean modificadas por este capítulo.

Art. 6º — El contrato de trabajo no podrá ser disuelto por voluntad de una de las partes, sin previo aviso, o en su defecto indemnización, además de la que corresponda al trabajador por su antigüedad en el empleo, cuando el contrato se disuelva por voluntad del empleador.

El preaviso, cuando las partes no lo fijen en un término mayor, deberá darse con la siguiente anticipación:

- a) Por el trabajador, de quince (15) días;
- b) Por el empleador, de quince (15) días cuando el trabajador tuviese una antigüedad en el empleo de más de treinta (30) días y hasta tres (3) meses; de un (1) mes cuando el trabajador tuviese una antigüedad en el empleo de más de tres (3) meses) y no exceda de cinco (5) años y de dos (2) meses cuando fuere superior.

Estos plazos correrán a partir del día siguiente al de la notificación del preaviso.

La parte que omita el preaviso o lo otorgue de modo insuficiente, deberá abonar a la otra una indemnización sustitutiva equivalente a la remuneración que correspondería al trabajador durante los plazos señalados.

Art. 7º — *Indemnización por antigüedad o despido.* En los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso, este deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a una doceava (1/12) parte de la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios, si éste fuera menor, por cada mes de servicio o fracción mayor de diez (10) días.

En ningún caso la mejor remuneración que se tome como base podrá exceder el equivalente de tres (3) veces el importe mensual de la suma que resulta del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador al momento del despido por la jornada legal o convencional, excluida la antigüedad. Al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social le corresponderá fijar y publicar el monto que corresponda juntamente con las escalas salariales de cada convenio colectivo de trabajo.

Para aquellos trabajadores no amparados por convenios colectivos de trabajo el tope establecido en el párrafo anterior será el que corresponda al convenio de actividad aplicable al establecimiento donde preste servicios o al convenio más favorable, en el caso de que hubiera más de uno.

Para aquellos trabajadores remunerados a comisión o con remuneraciones variables, será de aplicación el

convenio de la actividad a la que pertenezcan o aquel que se aplique en la empresa o establecimiento donde preste servicios, si éste fuere más favorable.

El importe de esta indemnización en ningún caso podrá ser inferior a dos doceavas (2/12) partes del sueldo calculadas en base al sistema establecido en este artículo.

Art. 8º — *Despido indirecto*. Cuando el trabajador hiciere denuncia del contrato de trabajo fundado en justa causa, tendrá derecho a las indemnizaciones previstas en los artículos 6º, 7º u 11, en su caso, de esta ley.

Art. 9º — *Falta de pago en término de la indemnización por despido inculcado*. En caso de falta de pago en término y sin causa justificada por parte del empleador, de la indemnización por despido inculcado o de un acuerdo rescisorio homologado, se presumirá la existencia de la conducta temeraria y maliciosa contemplada en el artículo 275 de la ley 20.744 (t.o. 1976).

Art. 10. — *Fuerza mayor, falta o disminución de trabajo. Monto de la indemnización*. En los casos que el despido fuese dispuesto por causa de fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador fehacientemente justificada, el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente a una dieciochoava (1/18) parte de la mejor remuneración normal y habitual del último año o período de la prestación, si fuere menor, por cada mes de antigüedad o fracción mayor de diez (10) días.

Rige el mismo tope que el establecido en el artículo 7º. El importe de esta indemnización no será inferior a dos dieciochoavas (2/18) partes del salario calculado de la misma forma.

En tal caso, el despido deberá comenzar por el personal menos antiguo dentro de cada especialidad.

Respecto del personal ingresado en un mismo semestre, deberá comenzarse por el que tuviese menos cargas de familia, aunque con ello se alterara el orden de antigüedad.

Art. 11. — *Despido discriminatorio*. Será considerado despido discriminatorio el originado en motivos de raza, sexo y religión.

En este supuesto la prueba estará a cargo de quien invoque la causal. La indemnización prevista en el artículo 7º de esta ley se incrementará en un treinta (30) por ciento y no se aplicará el tope establecido en el segundo párrafo del mismo.

### CAPÍTULO III

Art. 12. — Incorpora e como segundo párrafo del artículo 6º de la ley 14.250 (texto ordenado en 1988) el siguiente:

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las convenciones colectivas celebradas con anterioridad a la promulgación de la ley 23.545 y que con posterioridad al 1º de enero de 1988 no hubieran sido objeto de modificaciones por la vía de la celebración de acuerdos colectivos, cualquiera sea su naturaleza y alcance, caducarán, salvo pacto en contrario, en el plazo de dos años contados a

partir de la solicitud que en tal sentido formule una de las partes signatarias.

El plazo comenzará a operar a partir de la fecha en que cualquiera de las partes signatarias formalice ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la denuncia de la convención y la solicitud de negociación. Dicha petición debe ser expresa y haber sido admitida.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social declarará la admisibilidad de la solicitud y convocará a las partes para que constituyan la comisión negociadora respectiva.

Las cuestiones relativas a la integración de la comisión negociadora, al nivel de negociación o cualquier otra que pueda suscitarse no suspenden ni interrumpen los plazos fijados precedentemente.

Vencido el plazo sin que se haya obtenido acuerdo respecto de la celebración de un nuevo convenio colectivo se someterán los puntos en conflicto al procedimiento previsto en la ley 14.786. Agotado dicho procedimiento, la convención colectiva cuya renovación no se pudiese acordar, caducará de pleno derecho.

Art. 13. — El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social constituirá un servicio de mediación y arbitraje, previa consulta con las organizaciones de empleadores más representativas y la Confederación General del Trabajo, el que actuará en los conflictos colectivos que puedan plantearse y cuya intervención sea requerida por las partes.

Art. 14. — La representación de los trabajadores en la negociación de los convenios colectivos de trabajo en cualquiera de sus tipos, estará a cargo de la asociación sindical con personería gremial de grado superior, la que podrá delegar el poder de negociación en sus estructuras descentralizadas.

En unidades que registren la existencia de más de quinientos (500) trabajadores de una misma actividad, incluirán en su composición un representante delegado del personal, que reúna las condiciones establecidas en el artículo 40 y siguientes de la ley 23.551, nominado por la asociación sindical.

Art. 15. — Las convenciones colectivas de trabajo de ámbito superior podrán regular la organización colectiva del trabajo disponiendo la forma de aplicar las normas legales sobre jornadas y descansos, respetando los topos mínimos y máximos respectivos, y lo dispuesto por el artículo 3º *in fine* de esta ley.

Un convenio de ámbito menor vigente podrá prevalecer sobre otro convenio colectivo ulterior de ámbito mayor, siempre que esté prevista su articulación y que las partes celebrantes sean las mismas en ambos casos, de conformidad a lo prescrito por el artículo 14 de la presente ley. Vencido el término de vigencia del convenio colectivo de ámbito menor, el mismo caducará en el plazo de un (1) año, si las partes legítimas para su renovación no alcanzaran un nuevo acuerdo. En este caso, se aplicará la convención colectiva de trabajo de ámbito mayor.

La facultad de acordar la disponibilidad colectiva prevista en el presente artículo queda condicionada a la generación de empleo.



Art. 16. — En la negociación colectiva las partes deberán observar las siguientes reglas:

1. La concurrencia a las negociaciones y a las audiencias citadas en debida forma.
2. Presentación de pliego.
3. La realización de las reuniones que sean necesarias en los lugares y con la frecuencia y periodicidad que sean adecuadas.
4. La designación de negociadores con idoneidad y representatividad suficiente para discutir y alcanzar acuerdos sobre el contenido del temario de materias propuesto.
5. El intercambio de la información necesaria a los fines del examen de las cuestiones en debate, en especial la relacionada con la distribución de los beneficios de la productividad y la evolución del empleo.
6. La realización de los esfuerzos conducentes a lograr acuerdos que tengan en cuenta las diversas circunstancias del caso.

Ante el incumplimiento de estas obligaciones por alguna de las partes será de aplicación el régimen del artículo 55 de la ley 23.551 y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dará a conocimiento público la situación planteada a través de los medios de difusión.

#### CAPÍTULO IV

Art. 17. — Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 30 del Régimen de Contrato de Trabajo (ley 20.744, t.o. 1978) por el siguiente texto:

Los cedentes, contratistas o subcontratistas deberán exigir además a sus cesionarios o subcontratistas el número del Código Único de Identificación Laboral de cada uno de los trabajadores que presten servicios y la constancia de pago de las remuneraciones las cuales deberán ser equivalentes a la actividad del principal; copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de la seguridad social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una cobertura por riesgos del trabajo.

Esta responsabilidad del principal de ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones que tienen los cesionarios o subcontratistas respecto de cada uno de los trabajadores que presten servicios, no podrá delegarse en terceros y deberá ser exhibido cada uno de los comprobantes y constancias a pedido del trabajador y/o de la autoridad administrativa.

El incumplimiento de algunos de los requisitos hará responsable solidariamente al principal por las obligaciones de los cesionarios, contratistas o subcontratistas respecto del personal que ocuparen en la prestación de dichos trabajos o servicios y que fueren emergentes de la relación laboral incluyendo su extinción y de las obligaciones de la seguridad social.

Art. 18. — Créase una Comisión de Seguimiento del Régimen de Contrato de Trabajo y de las normas de las convenciones colectivas de trabajo, la que evaluará anualmente dicha normativa pudiendo proponer reformas

o modificaciones a la misma con el fin de promover y defender el empleo productivo.

Dicha Comisión de Seguimiento estará integrada por dos (2) representantes del gobierno nacional, uno de los cuales ejercerá la presidencia, el presidente del Consejo Federal de Administraciones del Trabajo o un representante miembro que éste designe al efecto, dos (2) representantes de la Confederación General del Trabajo y dos (2) representantes de las organizaciones más representativas de empleadores.

Art. 19. — Todos los contratos de trabajo, así como las pasantías, deberán ser registrados ante los organismos de seguridad social y tributarios en la misma forma y oportunidad que los contratos de trabajo por tiempo indeterminado.

Las comunicaciones pertinentes deberán indicar:

- a) El tipo de que se trate;
- b) En su caso, las fechas de inicio y finalización del contrato.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tendrá libre acceso a las bases de datos que contengan tales informaciones.

Art. 20. — El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social será la autoridad de aplicación de la presente ley.

Art. 21. — Deróganse los artículos 18, inciso b), 31 última parte, 28 a 40 y 43 a 65 de la ley 24.013; los artículos 1º, 3º, 4º y 5º de la ley 24.465, y el artículo 89 de la ley 24.467.

Art. 22. — *Cláusula transitoria.*

Los contratos celebrados bajo las modalidades previstas en los artículos 43 a 65 de la ley 24.013 y en los artículos 3º y 4º de la ley 24.465, se convertirán en contratos por tiempo indeterminado a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, siendo de aplicación las modificaciones previstas en la misma.

En cuanto a los aportes y contribuciones, regirá lo establecido en cada una de las modalidades mencionadas en el párrafo anterior, por el plazo que había sido estipulado originariamente en dichos contratos.

El tiempo que los trabajadores estuvieron bajo el régimen de estas modalidades, no será computado como tiempo de servicio a los efectos de la indemnización.

Art. 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De acuerdo al artículo 123 del reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 5 de mayo de 1998.

*Julio A. Miranda. — Alberto M. Tell. —  
Julio C. Humada. — Augusto Alasino.*

En disidencia parcial:

*Antonio F. Cafiero.*

#### ANTECEDENTE

Mensaje del Poder Ejecutivo

(18 de marzo de 1998)

*Al Honorable Congreso de la Nación.*

Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de acompañar un proyecto de reforma laboral que

incluye la modificación de algunos aspectos del Régimen de Contrato de Trabajo y de las leyes 24.013, 24.465 y 24.467, así como también de la normativa vigente en materia de convenciones colectivas de trabajo.

Las temáticas, materia del presente, han tenido un amplio, público y prolongado debate en el seno de la sociedad, quedando dirimidas con el proyecto de ley que se acompaña, el que incorpora aportes de sectores representativos de los empleadores y trabajadores que —comprendiendo la trascendencia histórica del momento que vivimos— han procurado alcanzar objetivos comunes, para facilitar con su apoyo la creación de instrumentos legales modernos que aseguren la transparencia, la estabilidad y la jerarquía de la relación de trabajo.

Esta propuesta no se ha erigido sobre la derrota de ninguno de los actores sociales que participaron con sus ideas, sino más bien sobre sus coincidencias y su concurrir inteligente, orientado al crecimiento con justicia social, el que posibilitará el anhelo de este presidente de ver a la Argentina, en poco tiempo más, dentro de los diez países más avanzados de la Tierra.

Entre los contenidos del proyecto se propone la derogación de las modalidades promovidas de contratación laboral previstas en la ley 24.013.

En la práctica, esas figuras legales tal cual están legisladas han producido una grave distorsión en las relaciones de trabajo y un impacto negativo en el financiamiento del sistema de seguridad social.

Por tales motivos se propone la eliminación de las modalidades mencionadas y, al mismo tiempo, acentuar la proporcionalidad de la indemnización por despido en el Régimen de Contrato de Trabajo, como se verá más adelante.

El régimen de pasantías previsto en el decreto 340 de fecha 24 de febrero de 1992, quedará estructurado en un nuevo contexto y su autoridad de aplicación será el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Por otro lado, se establece la naturaleza laboral del contrato de aprendizaje.

Para garantizar al trabajador y al sistema de seguridad social el cumplimiento de las obligaciones asumidas a su respecto por el empleador, se propone introducir una modificación en el artículo 30 del Régimen de Contrato de Trabajo estableciendo los recaudos que los cedentes, contratistas o subcontratistas deben requerir a sus co-contratantes para liberarse de la responsabilidad solidaria.

Se contempla un nuevo sistema indemnizatorio modificando el preaviso, suprimiendo la integración del mes de despido y en cuanto a la indemnización por antigüedad en el despido incausado, se deroga el mínimo legal de dos (2) meses y se establece el equivalente a la doceava (1/12) parte de la mejor remuneración mensual, normal y habitual como indemnización por cada mes trabajado o fracción mayor de diez (10) días, con un mínimo de dos doceavas (2/12) partes.

En este orden de ideas, se propone reducir a treinta (30) días el período de prueba establecido en la ley 24.465 e incorporado como artículo 92 bis del Régimen de Contrato de Trabajo.

Esta es otra de las figuras altamente distorsionantes de las relaciones de trabajo, ya que su uso sistemático por parte de empleadores inescrupulosos produjo el efecto inverso al buscado: desestabilizó la relación laboral e impactó negativamente en el sistema de la seguridad social con el consiguiente perjuicio para la sociedad.

El proyecto que se eleva propone que, por medio de la negociación colectiva, el período de prueba pueda ampliarse de treinta (30) a ciento ochenta (180) días, pudiendo las partes pactar para el período de extensión una modificación de hasta el cincuenta por ciento (50 %) de la indemnización por falta de preaviso y por antigüedad en el despido incausado.

Acorde con preceptos constitucionales y con las legislaciones más modernas, se introduce la figura del despido discriminatorio, con un régimen indemnizatorio agravado, quedando la carga de la prueba en cabeza de quien la invoca.

En el despido incausado la falta de pago en término de la indemnización o el incumplimiento de un acuerdo rescisorio homologado hace presumir la temeridad y malicia que será evaluada por los jueces conforme al artículo 275 del Régimen de Contrato de Trabajo.

En los casos de despido por causas económicas, se fija una indemnización atenuada.

En cuanto a los convenios colectivos, se propone la caducidad de aquellos convenios que con posterioridad al 1º de enero de 1988 no hayan sido renovados o sustituidos por otros acuerdos, cualquiera fuera su naturaleza y alcance. Tal caducidad operará a los dos (2) años, contados a partir de la solicitud expresa de cualquiera de las partes signatarias del convenio colectivo de trabajo.

Este trascendente paso en materia de modernización laboral, será seguido de otros tales como el Plan Nacional de Mejoramiento de la Calidad del Empleo, el fortalecimiento del poder de policía del trabajo a través de un Régimen Federal Unificado de Sanciones, la institucionalización del Consejo Federal de Administraciones del Trabajo y normas referidas a la seguridad e higiene en el trabajo.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

CARLOS S. MENEM.

Jorge A. Rodríguez. — Antonio E. González. — Raúl E. Granillo Ocampo.

## PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

### CAPÍTULO I

Artículo 1º — *Contrato de trabajo de aprendizaje.* El contrato de aprendizaje tendrá finalidad formativa teórico-práctica, la que será descrita con precisión en un programa adecuado al plazo de duración del contrato. Se celebrará por escrito entre un empleador y un joven sin empleo, de entre quince (15) y veintiocho (28) años.

Este contrato de trabajo tendrá una duración mínima de tres (3) meses y una máxima de un (1) año.



A la finalización del contrato el empleador deberá entregar al aprendiz un certificado suscrito por el responsable legal de la empresa, que acredite la experiencia o especialidad adquirida.

La jornada de trabajo de los aprendices no podrá superar las cuarenta (40) horas semanales, incluidas las correspondientes a la formación teórica. Respecto de los menores se aplicarán las disposiciones relativas a la jornada de trabajo de los mismos.

No podrán ser contratados como aprendices aquellos que hayan tenido una relación laboral previa con el mismo empleador. Agotado su plazo máximo, no podrá celebrarse nuevo contrato de aprendizaje respecto del mismo aprendiz.

El número total de aprendices contratados bajo esta modalidad no podrá superar el diez por ciento (10 %) de los contratados por tiempo indeterminado en el establecimiento de que se trate. Cuando dicho total no supere los diez (10) trabajadores será admitido un aprendiz. El empresario que no tuviere personal en relación de dependencia, también podrá contratar un aprendiz.

El empleador deberá preavisar con treinta (30) días de anticipación la terminación del contrato o abonar una indemnización sustitutiva de medio mes de sueldo.

El contrato se extinguirá por cumplimiento del plazo pactado; en este supuesto el empleador no estará obligado al pago de indemnización alguna al trabajador sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior. En los demás supuestos regirá el artículo 7º y concordantes de la presente ley.

Si el empleador incumpliera las obligaciones establecidas en esta ley el contrato se convertirá a todos sus fines en un contrato por tiempo indeterminado.

Las cooperativas de trabajo y las empresas de servicios eventuales no podrán hacer uso de este contrato.

**Art. 2º — Régimen de pasantías.** Cuando la relación se configure entre un empleador y un estudiante y tenga como fin primordial la práctica relacionada con su educación y formación, se configurará el contrato de pasantía.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social establecerá las normas a las que quedará sujeto dicho régimen.

**Art. 3º — Sustitúyese el artículo 92 bis del Régimen de Contrato de Trabajo (ley 20.744, t.o.) por el siguiente texto:**

**Artículo 92 bis: Período de prueba.** El contrato de trabajo por tiempo indeterminado se entenderá celebrado a prueba durante los primeros treinta (30) días. Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa y sin derecho a indemnización alguna con motivo de la extinción.

El período de prueba se regirá por las siguientes reglas:

1. Un mismo trabajador no podrá ser contratado a prueba, por el mismo empleador, más de una vez.
2. El empleador deberá registrar el contrato a prueba en el libro especial del artículo 52 de esta ley o, en su caso, en el previsto por el artículo 84 de la ley 24.467.

3. Durante el período de prueba el trabajador tendrá los derechos y obligaciones propios de la categoría o puesto de trabajo que desempeñe, incluidos los derechos sindicales, con las excepciones que se establecen en este artículo.

4. Durante los primeros treinta (30) días el empleador y el trabajador estarán obligados al pago de los aportes y contribuciones para las obras sociales y asignaciones familiares y exentos de los correspondientes a jubilaciones y pensiones, Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y Fondo Nacional de Empleo.

5. El trabajador tendrá derecho durante el período de prueba a las prestaciones por accidente o enfermedad del trabajo, incluidos los derechos establecidos para el caso de accidente o enfermedad inculparable, con excepción de lo prescrito en el cuarto párrafo del artículo 212 de esta ley.

6. Si el contrato continuara luego del período de prueba, éste se computará como tiempo de servicio a todos los efectos laborales y de la seguridad social.

Podrá ampliarse el período de prueba hasta seis (6) meses por convenio colectivo debidamente homologado.

Si se dispusiere la extensión convencional del período de prueba deberán realizarse, a partir del segundo mes, todos los aportes y contribuciones legales y convencionales, rigiendo las normas generales en materia de indemnización y preaviso. La disponibilidad colectiva de las indemnizaciones por falta de preaviso y por antigüedad en el despido inculcado será de hasta el cincuenta por ciento (50 %) del régimen general.

**Art. 4º —** Los contratos de trabajo en período de prueba que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley se hallaren en curso, continuarán hasta su finalización conforme al régimen en el cual tuvieron origen.

A partir de la vigencia de esta ley se aplicará, en todos los casos, este nuevo régimen, salvo que un convenio colectivo posterior a su sanción establezca uno distinto, dentro de los márgenes de disponibilidad colectiva.

## CAPÍTULO II

**Art. 5º —** Las disposiciones del presente capítulo serán de aplicación a los contratos de trabajo que se celebren a partir de la entrada en vigencia de esta ley. Sin perjuicio de ello, se les aplicarán también todas las disposiciones legales y reglamentarias que no sean modificadas por este capítulo.

**Art. 6º —** El contrato de trabajo no podrá ser disuelto por voluntad de una de las partes, sin previo aviso, o en su defecto indemnización, además de la que corresponda al trabajador por su antigüedad en el empleo, cuando el contrato se disuelva por voluntad del empleador.

El preaviso, cuando las partes no lo fijen en un término mayor, deberá darse con la siguiente anticipación:

- a) Por el trabajador, de quince (15) días.
- b) Por el empleador, de quince (15) días cuando el trabajador tuviese una antigüedad en el empleo de más de treinta días y hasta tres (3) meses; de un (1) mes cuando el trabajador tuviese una antigüedad en el empleo de más de tres (3) meses y no exceda de cinco (5) años; de dos (2) meses cuando el trabajador tuviese en el empleo una antigüedad de más de cinco (5) años.

Estos plazos correrán a partir del día siguiente al de la notificación del preaviso.

La parte que omita el preaviso o lo otorgue de modo insuficiente, deberá abonar a la otra una indemnización sustitutiva equivalente a la remuneración que correspondería al trabajador durante los plazos señalados.

Art. 7º — *Indemnización por antigüedad o despido.* En los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso, éste deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a una doceava (1/12) parte de la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios, si éste fuera menor, por cada mes de servicio o fracción mayor de diez (10) días.

En ningún caso la mejor remuneración que se tome como base podrá exceder el equivalente de tres (3) veces el importe mensual de la suma que resulta del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador al momento del despido por la jornada legal o convencional, excluida la antigüedad. Al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social le corresponderá fijar y publicar el monto que corresponda juntamente con las escalas salariales de cada convenio colectivo de trabajo.

Para aquellos trabajadores no amparados por convenios colectivos de trabajo el tope establecido en el párrafo anterior será el que corresponda al convenio de actividad aplicable al establecimiento donde preste servicios o al convenio más favorable, en el caso que hubiera más de uno.

Para aquellos trabajadores remunerados a comisión o con remuneraciones variables, será de aplicación el convenio de la actividad a la que pertenezcan o aquel que se apuque en la empresa o establecimiento donde preste servicios, si éste fuere más favorable.

El importe de esta indemnización en ningún caso podrá ser inferior a dos doceavas (2/12) partes del sueldo calculadas en base al sistema establecido en este artículo.

Art. 8º — *Despido indirecto.* Cuando el trabajador hiciere denuncia del contrato de trabajo fundado en justa causa, tendrá derecho a las indemnizaciones previstas en los artículos 6º y 7º u 11, en su caso, de esta ley.

Art. 9º — *Falta de pago en término de la indemnización por despido incausado.* En caso de falta de pago

en término y sin causa justificada por parte del empleador, de la indemnización por despido incausado o de un acuerdo rescisorio homologado, se presumirá la existencia de la conducta temeraria y maliciosa contemplada en el artículo 275 de la ley 20.744 (t.o. 1976).

Art. 10. — *Fuerza mayor, falta o disminución de trabajo. Monto de la indemnización.* En los casos que el despido fuese dispuesto por causa de fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador fehacientemente justificada, el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente a una dieciochoava (1/18) parte de la mejor remuneración normal y habitual del último año o período de la prestación, si fuere menor, por cada mes de antigüedad o fracción mayor de diez (10) días.

Rige el mismo tope que el establecido en el artículo 7º. El importe de esta indemnización no será inferior a dos dieciochoavas (2/18) partes del salario calculado de la misma forma.

En tales casos el despido deberá comenzar por el personal menos antiguo dentro de cada especialidad.

Respecto del personal ingresado en un mismo semestre, deberá comenzarse por el que tuviese menos cargas de familia, aunque con ello se alterara el orden de antigüedad.

Art. 11. — *Despido discriminatorio.* Será considerado despido discriminatorio el originado en motivos de raza, sexo o religión.

En este supuesto la prueba estará a cargo de quien invoque la causal. La indemnización prevista en el artículo 7º de esta ley se incrementará en un treinta (30) por ciento y no se aplicará el tope establecido en el segundo párrafo del mismo.

### CAPÍTULO III

Art. 12. — Incorpórase como segundo párrafo del artículo 6º de la ley 14.250 (t.o. 1988) el siguiente:

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las convenciones colectivas celebradas con anterioridad a la promulgación de la ley 23.545 y que no hubieran sido objeto de modificaciones por la vía de la celebración de acuerdos colectivos, cualquiera sea su naturaleza y alcance, con posterioridad al 1º de enero de 1988, caducarán, salvo pacto en contrario, en el plazo de dos (2) años contados a partir de la solicitud que en tal sentido formule una de las partes signatarias.

El plazo comenzará a operar a partir de la fecha en que cualquiera de las partes signatarias formalice ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la denuncia de la convención y la solicitud de negociación. Dicha petición debe ser expresa.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social declarará la admisibilidad de la solicitud y convocará a las partes para que constituyan la comisión negociadora respectiva.

Las cuestiones relativas a la integración de la comisión negociadora, al nivel de negociación o

cualquier otra que pueda suscitarse no suspenden ni interrumpen los plazos fijados precedentemente.

Vencido el plazo sin que se haya obtenido acuerdo respecto de la celebración de un nuevo convenio colectivo se someterán los puntos en conflicto al procedimiento previsto en la ley 14.786. Agotado dicho procedimiento, la convención colectiva cuya renovación no se pudiere acordar, caducará de pleno derecho.

Art. 13. — El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social constituirá un servicio de mediación y arbitraje, previa consulta con las organizaciones de empleadores más representativas y la Confederación General del Trabajo, el que actuará en los conflictos colectivos que puedan plantearse y cuya intervención sea requerida por las partes.

Art. 14. — La representación de los trabajadores en la negociación de los convenios colectivos de trabajo en cualquiera de sus tipos, estará a cargo de la asociación sindical con personería gremial de grado superior, la que podrá delegar el poder de negociación en sus estructuras descentralizadas.

En unidades que registren la existencia de más de quinientos (500) trabajadores de una misma actividad, incluirán en su composición un representante delegado del personal, que reúna las condiciones establecidas en el artículo 40 y siguientes de la ley 23.551, nominado por la asociación sindical.

Art. 15. — Las convenciones colectivas de trabajo de ámbito superior podrán regular la organización colectiva del trabajo disponiendo la forma de aplicar las normas legales sobre jornadas y descansos, respetando los topes mínimos y máximos respectivos, y lo dispuesto por el artículo 3º *in fine* de esta ley.

Un acuerdo colectivo de ámbito menor vigente no podrá ser afectado por una ulterior convención colectiva de ámbito mayor. Vencido el término de vigencia del convenio colectivo de ámbito menor, el mismo caducará en el plazo de un (1) año, si las partes legitimadas para su renovación no alcanzan un nuevo acuerdo. En este caso, se aplicará la convención colectiva de trabajo de ámbito mayor.

La facultad de acordar la disponibilidad colectiva prevista en el presente artículo queda condicionada a la generación de empleo.

Art. 16. — En la negociación colectiva las partes deberán observar las siguientes reglas:

1. La concurrencia a las negociaciones y a las audiencias citadas en debida forma.
2. La realización de las reuniones que sean necesarias en los lugares y con la frecuencia y periodicidad que sean adecuadas.
3. La designación de negociadores con idoneidad y representatividad suficiente para discutir y alcanzar acuerdos sobre el contenido del temario de materias propuesto.
4. El intercambio de la información necesaria a los fines del examen de las cuestiones en debate.

5. La realización de los esfuerzos conducentes a lograr acuerdos que tengan en cuenta las diversas circunstancias del caso.

Ante el incumplimiento de estas obligaciones por alguna de las partes será de aplicación el régimen del artículo 55 de la ley 23.551 y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dará a conocimiento público la situación planteada a través de los medios de difusión.

#### CAPÍTULO IV

Art. 17. — Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 30 del Régimen de Contrato de Trabajo (ley 20.744, t.o. 1976) por el siguiente texto:

Los cedentes, contratistas o subcontratistas deberán exigir además a sus cesionarios o subcontratistas el número del Código Único de Identificación Laboral de cada uno de los trabajadores que presten servicios, la remuneración que tendrá cada uno de ellos, copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de seguridad social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una cobertura por riesgos del trabajo.

La falta de alguno de estos requisitos hará responsable solidariamente al principal por las obligaciones de dichos cesionarios, contratistas o subcontratistas respecto al personal que ocuparen en la prestación de tales trabajos o servicios y las obligaciones de la seguridad social.

Art. 18. — Créase una Comisión de Seguimiento del Régimen de Contrato de Trabajo y de las normas de las convenciones colectivas de trabajo, la que evaluará anualmente dicha normativa, pudiendo proponer reformas o modificaciones a la misma con el fin de promover y defender el empleo productivo.

Dicha Comisión de Seguimiento estará integrada por dos (2) representantes del gobierno nacional, uno de los cuales ejercerá la presidencia, el presidente del Consejo Federal de Administraciones del Trabajo o un representante miembro que éste designe al efecto, dos (2) representantes de la Confederación General del Trabajo y dos (2) representantes de las organizaciones más representativas de empleadores.

Art. 19. — Todos los contratos de trabajo, así como las pasantías, deberán ser registrados ante los organismos de seguridad social y tributarios en la misma forma y oportunidad que los contratos de trabajo por tiempo indeterminado.

Las comunicaciones pertinentes deberán indicar:

- a) El tipo de que se trate;
- b) En su caso, las fechas de inicio y finalización del contrato.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tendrá libre acceso a las bases de datos que contengan tales informaciones.

Art. 20. — El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social será la autoridad de aplicación de la presente ley.

Art. 21. — Deróganse los artículos 18, inciso b), 31 última parte, 28 a 40 y 43 a 65 de la ley 24.013.

los artículos 1º, 3º, 4º y 5º de la ley 24.465, y el artículo 89 de la ley 24.467.

Art. 22. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

CARLOS S. MENEM.

Jorge A. Rodríguez. — Antonio E. González. — Raúl E. Granillo Ocampo.

**Sr. Presidente.** — Paso a explicar lo acordado ayer en la reunión de presidentes de bloque. Requero la atención de los señores senadores para que, luego, no pregunten respecto de cuestiones ya aclaradas.

Todos los discursos vertidos en la sesión anterior quedan incorporados a esta reunión. En consecuencia ningún senador que haya hablado en la sesión pasada podrá hacerlo ahora, con excepción del presidente de la comisión, que tiene derecho a hacer uso de la palabra dos veces.

La lista que había quedado pendiente de la sesión anterior está abierta. Esta Presidencia sugiere que en este instante se anoten quienes quieran hacer uso de la palabra. De la lista existente sólo faltaban hacer uso de la palabra los senadores León y Alasino. Entonces, quien no haya hablado en la sesión anterior y quiera hacerlo ahora, por favor, que se anote en este instante.

¿Queda cerrada la lista con los senadores León y Alasino? Por supuesto que el senador Miranda siempre tiene derecho a hablar porque es el presidente de la Comisión.

Tiene la palabra el señor senador López.

**Sr. López.** — Como informante de la minoría ¿tengo derecho de hacer uso de la palabra?

**Sr. Presidente.** — No. (Risas.)

7

#### MUESTRA DE PINTURA PAISAJISTICA EN SAN LUIS

**Sr. Agúndez.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

**Sr. Agúndez.** — Señor presidente: hay un proyecto, presentado juntamente con el del señor senador Bartolucci, referido a un encuentro de pintores paisajistas en la localidad de Merlo, San Luis.

Los hemos consensuado en un único proyecto. Como el encuentro es a partir del día 22 de este mes, simplemente solicito la colaboración para que sea tratado ahora. Nos llevará sólo un minuto.

**Sr. Presidente.** — El señor senador Agúndez está pidiendo en forma absolutamente intempestiva que nos apartemos del plan de labor aprobado y

que en este instante sea tratado el proyecto que declara de interés cultural el VII Encuentro Nacional Anual de Pintores Paisajistas.

¿Está de acuerdo el señor presidente del bloque Justicialista?

**Sr. Alasino.** — Sí, señor presidente.

**Sr. Presidente.** — En primer lugar, se va a votar la modificación al plan de labor solicitada por el señor senador por San Luis.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el señor senador por San Luis. Se necesitan los dos tercios para habilitar el tema.

Se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Por Secretaría se dará lectura.

**Sr. Secretario (PiuZZi).** — (Lee)

*El Senado de la Nación*

DECLARA:

1º — Declarar de interés cultural al VII Encuentro Nacional Anual de Pintores Paisajistas que, organizado por la Asociación de Artistas Plásticos y Artesanos "Palmira Scrosoppi", se desarrollará en la ciudad de Merlo (provincia de San Luis), del 22 al 25 de mayo de 1998.

2º — Solicitar al Poder Ejecutivo nacional, se sirva declarar a dicho evento de interés nacional.

3º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

**Sr. Presidente.** — En consideración en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

—En particular es igualmente afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.

8

#### REFORMA LABORAL (Continuación)

**Sr. Presidente.** — Continuamos con el tratamiento del Orden del Día N° 288 y Anexo.

Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

**Sr. León.** — Señor presidente: seguramente pocas veces en la historia de nuestra legislación se habrá trabajado con las dificultades que hoy tenemos para poder sancionar esta ley con la mejor

sabiduría que pueden aportar cada uno de los distintos sectores. Primero, porque está en juego uno de los campos más débiles de la sociedad: el del trabajo. Segundo, porque las posiciones han mostrado una gran flexibilidad y, tercero, porque incluso después de que este mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo tuviera entrada en este Senado, hoy leemos en los diarios que el ministro de Trabajo dice que este proyecto puede modificarse.

Por ahora vamos a trabajar con lo que tenemos. Para nosotros, los radicales, es un tema que nos apasiona porque nunca en la historia del país dejamos de apoyar una legislación al servicio de una mejor distribución social. Por eso no nos gusta este proyecto, nos oponemos a algunas de sus cláusulas y vamos a proponer al final que se inserte en el Diario de Sesiones el proyecto que hemos elaborado.

En esta etapa que el país está viviendo pareciera que le quitamos derechos a los sectores más desprotegidos y se los agregamos a los más privilegiados. Por un lado se derogan tipos de contrato, pero queda en pie su reaparición en la ley de flexibilización de las pymes como es el caso de algunos contratos promovidos.

No me voy a referir al contenido del proyecto en consideración, porque lo ha hecho con sabiduría el senador López, de nuestra bancada. Este proyecto deroga las modalidades de contratación promovida de la ley 24.013; establece el contrato de trabajo de aprendizaje y un régimen de pasantías, disminuye el período de prueba de los contratos por tiempo indeterminado, así como también el del preaviso y establece un nuevo régimen de indemnización para los contratos de trabajo por tiempo indeterminado.

Respecto de las convenciones colectivas celebradas antes de la promulgación de la ley 23.545 y que con posterioridad al 1º de enero de 1988 no hubieran sido objeto de modificaciones, caducarán en el plazo de dos años a partir de que una de las partes signatarias así lo solicite.

Con respecto al preaviso, éste se modifica. Se estipula un plazo de anticipación para el trabajador y el empleador de quince días.

Tal vez una innovación es que se admite para la negociación colectiva a un representante del personal nominado por la asociación sindical, en las unidades que registren más de quinientos trabajadores en esa actividad.

La ley que seguramente todos estamos buscando es una norma que sirva realmente a una socie-

dad más justa y equilibrada. Por eso tiene una alta significación en la sociedad de nuestro tiempo, porque reflexiona sobre funciones y medios que influyen de manera importante sobre nuestra realidad y la de nuestras actitudes culturales, sociales y económicas. Todo esto suma una especie de aspiración nacional.

Esta actitud define y reglamenta la actividad de las estructuras del trabajo, y de estas normas jurídicas emerge la propia significación de nuestro debate.

Alguien dijo alguna vez que cuando las normas mejor interpretan al derecho del que se derivan los fines y funciones es siempre mucho más optimista y posible la síntesis exitosa de nuestra búsqueda de mayor justicia.

Cuanto mejor interpretamos la significación del trabajo, sus conductas podrán prevalecer en el marco de intereses estrictamente específicos y, además, servirá para el cambio hacia una justicia social que creo —lo digo respetuosamente— ha sido la compañera histórica de los grandes partidos democráticos argentinos.

La propia actividad sindical orientada hacia el poder político del Estado, que algunos rechazan, puede servir de guía a modificaciones fundamentales en las estructuras sociales.

Creo realmente que el sector del trabajo integra uno de los factores del cambio estructural del que todos hablamos, pero desgraciadamente pareciera que cada vez se hace más difícil dicho cambio frente a la presencia de las famosas resultantes de lo que ya estamos llamando —casi fastidiosamente— globalización.

Creemos que estamos atravesando tiempos que han puesto en marcha políticas de acumulación, que no sirven más que a la disminución del rol del Estado, que creemos imprescindible para el logro de un equilibrio económico importante.

El avance globalizador es el que produce mayor injusticia; seguramente, no hace feliz a casi ninguno de los senadores que estamos aquí sentados.

La legislación que consideramos no puede perder de vista la situación planteada, donde pareciera que se está insertando una dosis mayor de injusticia en el campo social.

Como lo acabo de decir hace unos minutos, somos representantes de partidos que tienen una excelente tradición en la búsqueda de sociedades en las que la distribución de la riqueza sea mejor.

Ya en 1920, Yrigoyen mandó un Código de Trabajo para su análisis por parte del Congreso Na-

cional. Ayudamos, como todos, a la inserción del derecho de huelga en la Constitución; derecho que ahora se ha reglamentado, aunque creo que no hacía falta esa reglamentación.

El doctor Illia instaló el salario mínimo vital móvil, y cumplió. El justicialismo, con el general Perón, dio seguridad histórica al campo del trabajo y del sindicalismo, al margen de los ingredientes que siempre introducimos los partidos en las políticas de cualquier conducción, porque todos sabemos que cuando la historia sedimenta queda lo permanente y desaparecen los combates circunstanciales de nuestra militancia.

Los gobiernos anteriores, lo reitero e incluyo a los sectores federales y a otros partidos políticos que integran este Senado, siempre han custodiado la distribución de la riqueza.

Veamos cómo estaban las cosas cuando echaron a Illia y a Perón, y lo digo así, a dos lados, porque creo que respecto del tema que estamos debatiendo debe primar un criterio que merece situarse por encima de los aspectos partidarios, dado que hace a una estrategia nacional. Cuando echaron a Illia, decía, por ejemplo, el 46 por ciento de la riqueza estaba destinada al sector del trabajo y el 54 por ciento restante al sector del capital.

Ninguno de nosotros sabe hoy con exactitud cuál es el destino de la riqueza, pero todos sabemos que la minoría de los más ricos, algo así como el diez por ciento de la población, recibe aproximadamente el 60 por ciento de los ingresos, mientras que, por otra parte, se registra una caída del ingreso en el campo de los trabajadores.

Nos merece, por supuesto, como siempre, especial consideración el sector empresario. Lo creemos parte importante de la ecuación de la producción. Sin embargo, existen ciertos hechos que no podemos aplaudir, donde se advierten actitudes desnacionalizantes y excesiva vocación de lucro; donde se verifica una desviación conceptual de las patrióticas responsabilidades que siempre debemos mantener a fin de custodiar aquello que los radicales denominamos nuestra nativa solidaridad nacional.

Voy a abreviar mi discurso, porque veo que siempre somos derrotados por el tiempo.

Nos encontramos en un debate cuyos ingredientes generan rechazos, apoyos, consejos, que llega al Congreso acompañado del pensamiento de los empresarios, de la Iglesia, de todos los sectores políticos.

Nosotros debemos descubrir la forma de evitar que la concentración de la riqueza —y sus consecuencias— que hoy muestra el mundo, desequilibre demasiado lo que queremos custodiar. El señor Reich, secretario de Trabajo del presidente Clinton, manifestó que la lucha contra el desempleo no debe provocar un aumento de la desigualdad social. En consecuencia, la pregunta que deben formularse los gobernantes de todos los países avanzados es la siguiente: ¿elegir la creación de empleo o la equidad social? Este interrogante, de alguna manera, es el centro del debate de nuestro tiempo.

En los Estados Unidos se crearon 13 millones de puestos de trabajo y, actualmente, la tasa de desocupación de ese país es del 5 por ciento. Pero debemos puntualizar que los salarios correspondientes a esos 13 millones de puestos son realmente bajos.

En contraposición, las tasas de desempleo de Francia y de Alemania son de dos dígitos. Pero mientras en los Estados Unidos sólo el 20 por ciento de los desocupados permanece sin empleo por un lapso mayor de seis meses, en Europa el 50 por ciento de quienes se quedaron sin empleo no accede a uno nuevo por mucho más tiempo. Sin embargo, allí la distribución es mucho más equitativa.

También podemos mencionar que en los Estados Unidos, donde prácticamente no existen restricciones para el accionar de los empleadores, muchos trabajadores vieron disminuidos sus sueldos. Mientras tanto, en Europa Occidental, donde los empleadores no pueden despedir a los trabajadores con facilidad, donde todavía los salarios se fijan a través de las negociaciones colectivas y donde los beneficios sociales son realmente generosos, quienes perdieron su empleo dependen de la ayuda social para vivir.

Creo que la pregunta que debemos formularnos es si, de hecho, existe un camino que ofrezca mayor cantidad de empleos pero con equidad social. De alguna manera, considero que éste es, precisamente, el interrogante que a todos nos preocupa.

El artículo del que he extraído los datos que acabo de mencionar se titula "Empresarios más flexibles". Estoy de acuerdo con esa idea, porque aquí hay muchos que reclaman flexibilidad mientras, de hecho, no flexibilizan sus actitudes.

En ese artículo también se hace referencia a la necesidad de contar con obreros mejor capacitados. Estamos de acuerdo con ese objetivo, porque en la medida que nuestro país pueda privilegiar la formación técnica de sus trabajadores, ellos mis-



mos estarán en mejores condiciones para defender su situación laboral.

Estamos en presencia de un nuevo avance de la idea de que la economía y sus necesidades imponen una mayor declinación del desarrollo humano. En consecuencia, pretender la continuidad de beneficios sociales en economías dudosas es un sueño casi condenado al fracaso en la actualidad.

Más adelante, en ese artículo también se indica que la salud de la economía exige la reducción de derechos conquistados hace tiempo en la búsqueda de una mayor justicia social.

Hoy, desde el Ministerio de Economía, se justifica la flexibilización del mercado del trabajo y se considera que la protección instrumentada por el derecho del trabajador debe desaparecer ante las exigencias económicas o, por lo menos, es necesario transar.

Nuestro ministro de Economía, al que debo respetar pero puedo criticar, festeja en diversos banquetes, acompañado por banqueros, el rumbo de la economía, pero luego, cuando sale a la luz la situación de los componentes sociales más débiles, habla de crisis.

Los más pobres no son culpables de la desocupación, del endeudamiento ni de la transnacionalización que agobia a todos los países que no se hallan en la síntesis del mundo desarrollado.

La flexibilización, tal cual fue instrumentada, no ha servido para lograr mayor productividad, menos desocupación ni crecimiento.

En lo personal, estoy de acuerdo con la idea de oxigenar a las empresas. Pero, si lo hacemos, también debemos oxigenar la vida y las oportunidades de los trabajadores.

La flexibilización no debe significar negación de derechos ni disminución de justicia. El desarrollo humano debe ser factor para el crecimiento. Pensamos que la inversión en ese desarrollo debe ser un compromiso insoslayable del Estado y de una moderna concepción empresarial.

Se pide mayor productividad a quienes cada vez comen menos y a quienes pueden llegar a una educación menos saludable. El empleo, según la cumbre mundial para el desarrollo social, está vinculado con la pobreza y con la exclusión social. Estos valores constituyen los rasgos de la globalización y sus formas injustas se observan en casi todo el mundo. Están vinculados con el comercio, la industria, el capital financiero.

Al instalarse en un país la transnacionalización industrial se crean empleos nuevos, pero también

se destruyen otros, porque se llega con tecnología y robots. Asimismo, se ocasionan efectos nada ideales, incluso en los países más desarrollados. Podemos decir que ésta es una verdad que se observa en el mapa del mundo.

El capital financiero y especulativo está produciendo graves problemas económicos en los niveles nacionales e internacionales. En una época de gran concentración financiera, los capitales sólo aspiran a mayores beneficios con el menor riesgo y en el menor tiempo.

Si esto preocupa a las economías más desarrolladas, pensemos qué pasa con las más débiles de América latina. Mientras no se modifiquen las actuales reglas de juego y la decisión siga en manos del poder financiero internacional, es claro que los capitalistas no irán a los países en desarrollo que necesitan inversiones. Seguramente, no irán donde los llaman sino donde tienen ganas y obtienen mayores ganancias.

La humanidad está preocupada porque se está formando una especie de aristocracia del dinero, de la ganancia, de la riqueza. Algunos muestran sus logros en las revistas, que tienen de espectadores a los desocupados, quienes contemplan el avance de la pobreza y la declinación de las economías regionales. Se sienten impotentes al observar que pequeñas, medianas y hasta algunas grandes empresas desarticuladas van dejando producción y esperanzas al borde del camino. Como en la selva, una empresa va derrotando a otra, del mismo modo que una fiera devora a otra.

Mientras, hacemos pagar más impuestos a los pobres y eliminamos los aportes patronales. El doctor Cavallo regaló 3.500 millones de dólares al sector empresarial para bajar el costo laboral. Este es uno de los ejemplos de mayor degradación en el sistema de seguridad social de nuestro país. No creo que ésta sea una buena política.

La habilidad de prever las necesidades de la gente y la combinación de los factores de producción deben constituir una ecuación en la que el trabajador y la empresa instalen el equilibrio que lleve a la producción y al desarrollo. Pareciera que en este proyecto el Estado se lava un poco las manos. Esto no sirve para el equilibrio de la legitimidad sociológica que históricamente buscaron todos los partidos representados en el Senado.

En el dramático tiempo que vivimos, y que sufren más que nosotros los trabajadores, nos ponemos a discutir cómo los defendemos. Creo que todos los que estamos aquí queremos defenderlos

de esa realidad en la que la canasta familiar triplica el ingreso promedio de los asalariados y en la que la desnacionalización provoca una desocupación que lesiona profundamente nuestras bases sociales.

Tal vez una síntesis generosa de todas las ideas y posicionamientos tendría que haberse intentado en nombre de una conducta integradora que debemos tener, incluso, hasta por patriotismo y solidaridad.

Se nos prometió el "salariazó" y hoy descubrimos la intemperie. Tenemos una desocupación que oficialmente se dice que alcanza al 14 por ciento, pero que aparece disimulada por el trabajo en negro concentrado y por subsidios que ciertamente no son ejemplos de democracia. No crean que me alegro por esto. Al contrario, me produce tristeza. Alguien dijo en otra oportunidad que pareciera que la oposición se alegra ante el fracaso de algunas decisiones del gobierno. A esto respondo que todos tenemos metida en el alma la concepción de una Nación. ¡Cómo vamos a alegrarnos, entonces, por los sinsabores que pueda sufrir nuestra Nación!

Aquí estamos el oficialismo y la oposición. ¿En qué coincidimos y qué cosas nos separan? Coincidimos seguramente en que, para que tenga vigor una real transformación laboral, ésta no podrá estar aislada de un cambio definido en las relaciones entre el capital y el trabajo. Coincidimos también en que hay que desdoblarse los moldes de una actualidad de perversa distribución y en que hay que eliminar los "contratos basura". También hay que descartar las "políticas basura".

Hasta no hace mucho tiempo salía en los diarios la propuesta de quienes hablaban de doce horas de trabajo diario y de treinta días sin descanso. Pese a tener un régimen de cuarenta y ocho horas, nuestro país es uno de los que tienen más horas de trabajo por semana. En los diarios de hoy se dice que Francia ha bajado esa cantidad de horas, lo cual permitirá crear 213 mil puestos de trabajo.

En el mundo, quien tiene que ser generoso tampoco está acertando en la solución de este problema. Por ejemplo, hay desempleo en Inglaterra y en Alemania, donde el nivel al que se llega es altísimo. Y también lo hay en España donde, si no existiese lo que se llama el "trabajo sumergido", el nivel de desempleo sería uno de los más altos a nivel internacional.

Para terminar, señor presidente, quiero decir que no estamos en la Argentina de 1916, cuando

Yrigoyen puso el genio de su sentido social para arrancar de la tierra y del alma de nuestra gente una actitud de transformación. Fue tan grande la transformación que terminaron echándolo en 1930, cuando el producto bruto de la Argentina era el doble del de toda América latina.

Tampoco estamos en 1946, cuando el general Perón llevó a una mejor justicia y distribución entre todos los sectores.

Entiendo que estamos en un momento que es como una peligrosa bisagra, donde desde los poderes de la concentración económica se está consiguiendo desplazar muchas ilusiones argentinas de crecimiento emancipado y con custodia del poder de decisión nacional. No debemos permitir que se nos escape —como por momentos parece que ocurre— la custodia de la decisión nacional.

A nadie le gusta ver a nuestro ministro de Trabajo justificar afuera políticas con las que podemos coincidir o disentir, pero que pertenecen a nuestro país, a nuestros empresarios, a nuestros trabajadores, a nuestros partidos políticos. Esto que nos pertenece no se puede negociar afuera.

No debemos permitir que las pautas de la globalización —con sus consecuencias de injusticia— hagan que en nuestra patria aquellas imágenes de los partidos que gobernaron antes, que mostraban una sociedad muy honorable en su distribución, sean desplazadas por ese abismo entre ricos y pobres, que genera violencia y que no queremos para hoy y mucho menos para nuestras nuevas generaciones.

**Sr. Presidente.** — Ha concluido su tiempo, señor senador.

**Sr. León.** — Le pido tres minutos más, señor presidente.

**Sr. Presidente.** — Está bien, señor senador.

**Sr. León.** — Quiero terminar leyendo algo que dijo un gran hombre del radicalismo que alentó la justicia social en la Argentina. Me refiero a Crisólogo Larralde, quien escribió que ha sido el sindicato, ha sido el gremio, han sido los hombres del tiempo de las utopías sociales, los filósofos populares de la economía y los incorruptibles y valientes dirigentes olvidados de las luchas sociales de todos los tiempos, quienes, en defensa de los derechos del hombre, demolieron las torres del privilegio y forzaron el paso a las nuevas formas de nuestra convivencia.

Señor presidente: entre la concentración del poder económico y la diseminación de la pobreza hay una brecha, un abismo que se debe llenar de

solidaridad social y manejo patriótico de nuestras discusiones nacionales.

Para esto —y lo digo respetuosamente— no es bueno rendir examen en Nueva York ni en Washington. Debemos rendir examen ante nuestro pueblo.

**Sr. Presidente.** — Para cerrar la lista de oradores, tiene la palabra el presidente del bloque Justicialista.

Una vez votado el proyecto, voy a hacer votar los pedidos de inserción; entre ellos, el texto alternativo formulado por el señor senador León y el discurso del señor presidente de la comisión.

**Sr. Alasino.** — Señor presidente: voy a tratar de no extenderme por más de diez o quince minutos. Pido a los presidentes de bloque que llamen a los señores senadores para votar.

Comienzo en forma distinta de como lo tenía pensado, porque he escuchado atentamente las reflexiones del señor senador por el Chaco.

Veía un trabajo de algunos observadores extranjeros que miran con atención el proceso argentino. Es una visión totalmente objetiva, crítica, donde relatan el fenómeno que ven.

Esta gente decía: la economía argentina se encuentra atrapada por su propio éxito. El tipo de cambio abatió la inflación, pero este mismo tipo de cambio apreció la moneda en términos reales, limitando el crecimiento de las exportaciones y el aumento del empleo. Las reformas microeconómicas han aumentado la eficiencia pero, como contrapartida, han amenazado la distribución del ingreso y por tanto se amenaza la estabilidad política.

Quiero empezar con estas reflexiones porque lo que estamos dispuestos a votar marca un hito en la historia argentina y, en especial, en este proceso de transformación.

Creo, señor presidente, que a lo largo de la historia del movimiento obrero han existido cuatro o cinco puntos de inflexión.

Debemos remontarnos al comienzo de las luchas obreras en la Argentina de principios de siglo, en momentos en que Joaquín V. González proyecta el primer código o ley nacional del trabajo, que nunca se aprobó, y analizar luego el nacimiento del moderno movimiento sindical argentino durante los primeros gobiernos peronistas para poder advertir allí la aparición de otras alternativas, distintas a las que hasta ese momento se venían dando en el país.

Por otra parte, debemos advertir que la caída del gobierno del general Perón dio lugar a una eta-

pa que a los peronistas nos gustó llamar "de la resistencia peronista" y que en materia de luchas obreras tuvo hitos muy importantes como la aprobación del decreto 7.107 del 19 de abril de 1956, por el cual los dirigentes sindicales fueron inhabilitados para trabajar en sus tareas habituales y, un mes después, la aprobación del decreto 9.270, que derogó la personería gremial de las distintas agrupaciones sindicales y el sindicato único por actividad, que hasta ese momento constituían una costumbre argentina, intentando volver al sindicato por empresa.

Debemos remontarnos también a las luchas, casi contemporáneas, dentro del movimiento obrero argentino para poder analizar el fenómeno de la división de la CGT en la CGT Azopardo y la CGT de los Argentinos.

Quiero recordar también otra experiencia que hemos tenido los argentinos cuando la mayoría de quienes hoy estamos aquí éramos estudiantes. Me refiero a la aparición del clasismo en nuestro país. Quién no tuvo en sus manos el proyecto SITRAC-SITRAM o el Programa de La Falda, que volvía en cierta forma a la hipótesis de 1956 contenida en el decreto que recientemente he mencionado, tratando de imponer los sindicatos por empresa.

Debemos tener presente también que cuando logramos finalmente recuperar la democracia en 1973, el peronismo aprobó las leyes de asociaciones profesionales y de contrato de trabajo, a cuyo espíritu hoy, de alguna manera, estamos volviendo, las que rigieron en nuestro país hasta que el Proceso de Reorganización Nacional abolió los derechos a la sindicalización y a la huelga, que hasta ese momento asistían al movimiento obrero argentino.

Y por último, debemos recordar la intención del gobierno del doctor Alfonsín de volver a un sistema distinto dentro del ordenamiento sindical y la reapertura, en 1986, de las negociaciones colectivas de trabajo.

Los peronistas tenemos una lectura propia de todos estos cambios a los que hemos venido asistiendo, que si bien no intenta ser universal ni ser la única, creemos que sí constituye una toma de posición sobre esta cuestión, y es la que en estos tiempos tan difíciles ha intentado llevar a cabo el gobierno del presidente Menem.

No estoy revelando ninguna verdad de Perogrullo, señor presidente, si afirmo que los grandes cambios no se dan de manera instantánea ni se limitan a un momento determinado. Se trata de una

cuestión permanente, y en ese sentido los justicialistas sabemos bien que así como el 45 no fue igual que el 73, el 89 no es lo mismo que el 98; y siempre que enfrentamos los problemas intentamos plantear soluciones, porque el modelo no es extraño a la historia y viceversa.

Quien no quiera entender esta relación dialéctica se quedará a mitad de camino en cualquier explicación. Así como en 1945, siguiendo a Keynes, el Estado intervenía en todo —y Perón lo entendió así—, en 1990, cuando ya ni siquiera existe el muro de Berlín y el capitalismo alcanzó un desarrollo mundial, nos encontramos inmersos en un proceso de globalización y dentro de él vamos construyendo nuestro modelo.

Si bien hemos hecho una gran cantidad de cosas, todavía nos quedan muchas por realizar. Y, teniendo en cuenta algunas de las afirmaciones que se han hecho desde la oposición, quiero que quede bien en claro que nuestro proyecto político no anima una sociedad dual, dividida entre los que están adentro, porque trabajan, y quienes están afuera, porque viven de la caridad o la asistencia pública.

Desde 1989, nuestro gobierno viene impulsando una transformación y una revolución tecnológica, pero como dije al principio, cuando leí la opinión de estos investigadores internacionales, se ha producido una consecuencia no querida, que es precisamente la desocupación. De todas maneras, desde que este fenómeno apareció en la Argentina, el peronismo nunca se quedó de brazos cruzados sino que, por el contrario, siempre avanzó proponiendo soluciones, que tuvieron mayor o menor éxito. Y cuando el desempleo se presentó como uno de los efectos más negativos y más serios de nuestro proyecto político, respondimos reduciendo las cargas sociales, imaginando nuevas modalidades de contratación, sancionando la ley de riesgos del trabajo y definiendo un nuevo régimen legal para la pequeña y mediana empresa.

Sin embargo, no sería del todo honesto si no reconociera que todas estas medidas acarrearán algún tipo de consecuencias en el mercado laboral; nosotros no nos resignamos a pensar que sean permanentes y, en consecuencia, a través de proyectos como los que hoy estamos considerando, intentamos solucionar y revertir las dificultades que aparecieron.

Actualmente, podemos encontrar cuatro clases de mercados de trabajo. En primer lugar, el informal-fraudulento, que consiste en el trabajo en negro, el no registrado y que el INDEC estima que

abarca a 3.300.000 trabajadores, es decir, el 40 por ciento de los asalariados.

En segundo término, el mercado formal de emergencia, que está compuesto por los trabajadores contratados bajo las nuevas modalidades a que hice referencia y que representan aproximadamente el 15 por ciento de los asalariados.

En tercer orden, el denominado "rígidamente formal", o "formal con negociación colectiva rígida", en el que están incluidos los convenios colectivos con ultraactividad —que datan, en algunos casos, de la década del 70— y también los estatutos especiales, como el de la construcción y el del periodismo.

Por último, existe otro mercado, también formal pero con negociación colectiva flexible, en el que incluimos a todas las organizaciones gremiales, ex empresas del Estado y particulares —como empresas automotrices y de alimentación—, que han visto flexibilizada o modernizada la legislación específica que se les aplica.

¿Qué pretendemos los peronistas? Que haya un solo mercado. Pretendemos sintetizar en una sola las cuatro formas o especies en que el mercado del trabajo se presenta. Para eso estamos trabajando, y por eso venimos proponiendo cosas. Pero también esperamos que se nos propongan alternativas, para discutir la mejor manera de lograr este objetivo que, no tengo dudas, es de todos los argentinos.

¿Quiénes son los responsables de la desocupación? La primera hipótesis puede apuntar al gobierno, o al mercado, o a la insensibilidad, o a la crueldad, o a la política. Pero se trata de un análisis totalmente parcial. La cosa no es así.

Admito —y debemos admitir— que tal vez tomamos medidas equivocadas o fuimos remisos en tomar nuevos tipos de medidas, como las que pretendemos tomar hoy. Pero no es el gobierno, ni el Partido Justicialista —al que le toca hoy gobernar— el responsable de la desocupación; ni siquiera la oposición, que quizás no define una propuesta clara o alternativa respecto de lo que venimos aquí a proponer. Simplemente, a título de ejemplificación, puedo señalar como responsables a quienes evaden impuestos y cargas sociales, a quienes no invierten en capacitar y actualizar a su mano de obra, a quienes usan el despido en forma arbitraria, a quienes administran mal los recursos públicos y privados, a quienes lucran con los juicios laborales, a quienes alientan expectativas económicas negativas, a quienes reparten dividendos sin tener en

cuenta los objetivos de inversión, a quienes se resisten a renovarse, a quienes no mejoran la productividad, y a quienes no cumplen el rol de empresarios y se limitan sólo a especular. Como alguna vez se expresó aquí, existe una responsabilidad compartida de trabajadores, empresarios y gobierno en esta nueva "solidaridad multifunción" o, por lo menos, con distintos y varios actores. Por ello, evidentemente, sin la colaboración absoluta de todos esos actores, será imposible lograr una mejora real de esta situación.

Quizá nosotros no venimos a proponer la solución absoluta, pero tenemos la intención de no quedarnos con los brazos cruzados. Por eso lanzamos a la discusión de la comunidad argentina estas propuestas concretas. Proponemos una renovación, una ley que creemos que va a ser un hito importante en el derecho contractual colectivo e individual del trabajo y en las organizaciones sindicales. Intentamos adecuar las normas o algunas de ellas a la realidad histórica, a una realidad que muestra una dicotomía como la expresada hace unos minutos con toda claridad por el señor senador por el Chaco: un impresionante desarrollo económico, con dos cuestiones fundamentales a ser resueltas, a saber, la desocupación y la inequidad.

El proyecto que nos proponemos votar constituye —y esto es una íntima convicción— un hecho histórico para los argentinos porque estamos a punto de tomar una decisión trascendental.

La historia del contrato de trabajo en la Argentina, desde la ley que elaboraron los legisladores socialistas hasta el momento en que el justicialismo la puso en práctica, siempre tuvo como eje el contrato por tiempo indeterminado. A decir verdad, a partir de que este gobierno comenzó la transformación económica y se encontró con situaciones difíciles que lo obligaron a poner en la mesa de la discusión nuevas propuestas —como las modalidades promovidas, a las que recién hice referencia— probablemente se empezó a dudar de sí, de ahora en más, el eje para el derecho laboral argentino seguiría siendo el contrato por tiempo indeterminado.

Creo que la comunidad argentina y los trabajadores tuvieron derecho a dudar de esa tradición —íntimamente también lo hicimos muchos de nosotros— y a pesar de que desandaríamos setenta años de tradición laboral y que tiraríamos por la borda el espíritu que, de algún modo, reinó a partir de la sanción de la ley 20.744. Se pudo pensar que liberalizaríamos de tal forma el trabajo que el nuevo eje del contrato individual pasaría a ser el contrato

a plazo fijo o, si se quiere, la precarización o la vía de los contratos basura.

Creo que una de las primeras cosas que reafirma este proyecto es que el contrato por tiempo indeterminado es la regla a la cual vuelve, de alguna manera en forma definitiva, toda la comunidad argentina. Frente a ello, no debe haber ninguna duda de que estamos ante un gran avance y de que políticamente se define cómo los argentinos construiremos la recuperación del nivel de ocupación de los trabajadores. También es importante decir que este proyecto de ley reivindica una tradición que no comparten algunos argentinos pero que se vincula con la defensa de las reivindicaciones laborales en la Argentina.

Este proyecto de ley resolverá todas las aventuras —no lo digo en forma irrespetuosa— o intentos que se dieron desde 1956, cuando se derogaron las convenciones colectivas por actividad. Esto comprende la experiencia del sindicalismo clasista, del SITRAC-SITRAM y hasta la propuesta que recibimos en este cuerpo cuando el radicalismo propuso la ley Mucci. Obviamente, este proyecto de ley va a contrapelo de todo ello, ya que todavía creemos que la diferencia entre el trabajo y el capital implica que deben establecerse mecanismos que le den al trabajador fortaleza en las negociaciones. Hemos definido a la organización gremial como el eje mediante el cual, a partir de la discusión de los convenios colectivos, se va a intentar defender los intereses de los trabajadores. Este mismo proyecto de ley va a permitir que, cuando hubiera acuerdo de partes o las circunstancias lo exigieran, también exista la posibilidad de que se modernice o se flexibilice la discusión bajando a nivel de las empresas, de las regiones, o de situaciones particulares que se pueden dar en cada plano o actividad que se regule.

Creo, señor presidente, que este proyecto de ley —y voy a dejar para la discusión en particular las observaciones puntuales sobre lo que es específico en este proyecto— viene a mantener algo que fue, durante muchos años, denostado, malentendido o condenado, como la ultraactividad. Es la solución que el proyecto da al problema. Es una solución ecuaníme, que permite que las partes, denunciando el convenio, puedan abrir las discusiones. Pero si esto no se hace porque ninguna de las dos lo exige, que el trabajador no quede desprotegido. Algunos soñaban, señor presidente, que cada uno de los trabajadores podía quedar librado a su suerte y las protecciones que tuviera no fueran ni siquiera las de la ley común.

Creo que esto, desde el punto de vista del derecho del trabajo, perfila un modelo que sigue el camino de las tradiciones argentinas, con este afán permanente que ha tenido el justicialismo de poner por delante las cosas importantes de los trabajadores. Con los trabajadores, señor presidente, el peronismo nunca fue paternalista. Lo que hizo fue darles la igualdad en la discusión y las herramientas para hacerla. Esta es la diferencia entre una actitud paternalista o de tutela y una actitud de respeto.

Estamos convencidos de que todas las conquistas que se lograron a través del tiempo han sido el resultado de esta política o de esta forma de ver las cosas. Por eso presentamos este proyecto de modernización, en el que atendemos los reclamos que se nos hacen, desde el empresariado o los organismos internacionales. Pero lo hacemos a nuestra manera, desde nuestro punto de vista y teniendo en cuenta las urgencias y las necesidades del país, como aquellas a las que hizo referencia el señor senador por el Chaco y que yo también menciono. Aquí hay desocupación.

Creemos, señor presidente, que este proyecto sigue ese camino que mencionara.

A nosotros —y lo digo con todo respeto—, cuando nos hemos reunido a conversar no solamente con los señores empresarios sino con aquellas organizaciones sindicales que no acompañan este proyecto, esto que estamos diciendo se nos ha reconocido.

Tal vez piensen que es poco, pero esta decisión que tomamos aquí reconoce una decisión política de la que no digo que sea novedosa, pero pone punto final a una forma de ver las cosas o a una consecuencia no deseada de la transformación. Y por primera vez decimos que en este aspecto del derecho de trabajo, dentro de estos parámetros, el gobierno, el Estado argentino, va a proteger a los trabajadores.

No tengo ninguna duda de que esto se verá al andar, señor presidente. Y esta reforma, que el presidente se ha cansado de decir que es su propuesta, y de la que ha conversado con distintos sectores —grupos de empresarios, de trabajadores— sin tal vez satisfacer del todo a ninguno, considero que hoy está en el justo medio entre la necesidad y la perspectiva de abrir un nuevo camino.

Señor presidente: no se nos escapa que todas estas legislaciones son perfectibles. Pero de más está decir que desde que existe esta ley, cualquier proyecto que venga a modificarla tendrá que ser discutido aquí. Y el Parlamento es el que definirá si es posible de mejora, modificación o cambio.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

**Sr. Miranda.** — En función de acelerar el tratamiento y votación de este proyecto, solicito la inserción de algunas reflexiones. Pido también que la votación se realice por capítulos.

—Asentimiento.

—El texto de la inserción solicitada es el siguiente:

#### *Indemnización:*

Hoy el 80 % de los trabajadores que son contratados no tienen ningún tipo de indemnización y hay del 40% de trabajadores en negro. Lo que tiende la ley es exactamente a regularizar esa situación lo cual permitirá equilibrar el déficit de la seguridad social.

Por lo cual no es cierto que el proyecto oficial los perjudique.

En lo referente al cuadro comparativo elaborado por el senador radical debemos formular las siguientes observaciones: a la fecha un trabajador que ingresa por tiempo indeterminado no tiene ningún tipo de indemnización durante los 3 (tres) primeros meses de su relación laboral que se extiende en la mayoría de los casos hasta 6 (seis) meses.

Con el proyecto el trabajador tiene derecho a indemnización no sólo por antigüedad sino también a preaviso a partir del segundo mes.

#### *Segundo tema:*

El proyecto no elimina el derecho que el trabajador tiene al aguinaldo y vacaciones proporcionales en caso de despido. Como bien se explica lo único que modifica es el régimen indemnizatorio, circunstancia ésta que no es tenida en cuenta en la observación formulada por el senador radical.

Como observación general es necesario señalar el acuerdo convencional para la prolongación del período de prueba a 6 (seis) meses se está garantizando, a diferencia del régimen actual, que durante ese período las empresas deberán abonar la totalidad de las cargas y además se garantiza al trabajador una indemnización, en caso de ruptura que en ningún caso puede ser inferior al 50% de lo que legalmente le correspondería.

#### *Aprendizaje:*

El proyecto modifica el actual régimen de aprendizaje transformándolo... de una modalidad promovida a un verdadero contrato laboral y ello con todos los derechos y obligaciones que estas circunstancias se generan.

Se prioriza la capacitación del trabajador y se legisla protegiendo al joven que recién ingresa al mercado laboral bajo estas condiciones exigiendo al empleador el fiel cumplimiento del fin querido por la ley trayendo como sanción en caso de fraude la transformación de dicho contrato laboral de aprendizaje en un contrato



por tiempo indeterminado con todas las derivaciones que el mismo implica.

#### *Despido discriminatorio:*

Lo que el proyecto establece es un agravante al despido incausado por circunstancias taxativamente enumeradas.

Consideramos que no es exacta la presunción de litigiosidad que el artículo generaría.

Lo dicho se fundamenta en que:

- a) la carga de la prueba se encuentra a cargo del trabajador;
- b) las situaciones agravantes enunciadas difícilmente surjan de la documentación de la empresa como expresara en su criterio algún senador.

Lo que el proyecto contiene es la adecuación de nuestra legislación laboral a convenios oportunamente suscritos por nuestro país.

Circunstancias que merecen un especial tratamiento por nuestra normativa las cuales incluso tienen establecido un porcentaje determinado de agravante indemnizatorio.

Entendemos en este supuesto que no puede excluirse la situación analizada por el artículo desde la óptica de la eventual litigiosidad que el mismo puede contener sino que por el contrario la legislación laboral debe tender cada vez más a cubrir circunstancias que en caso de no estar regladas provocan la necesidad del trabajador afectado de recurrir a la Justicia para que esta haga su propia interpretación.

#### *Convenio por empresa:*

La interpretación realizada sobre el tema no se ajusta al contenido del proyecto. Nada impide a ningún tipo de empresa a negociar con la organización sindical un propio convenio. Y ello sin importar el número de trabajadores que en la misma se desempeñan.

Lo que prevé la ley es que en el supuesto de que la empresa cuente con más de 500 trabajadores participe de dicha negociación un delegado del personal.

Delegado éste que conforme a lo establecido por la legislación vigente ha sido designado por el voto directo y secreto de todos los trabajadores de la empresa afiliados o no a la organización gremial.

Si bien esta circunstancia en la práctica cotidiana resulta natural a la negociación, lo que la ley pretende es simplemente normatizar esa presencia.

Es por ello que no resulta comprensible que se pretenda aducir que la negociación por empresa está limitada a las que cuenten con más de 500 trabajadores.

Cabe recordar a los señores senadores que el régimen aquí establecido no deroga la ley especial para la pequeña y mediana empresa.

#### *Argumentos finales:*

Hoy los trabajadores se encuentran en su mayoría empleados bajo modalidades promovidas sin indemnización ni preaviso y sin cobertura de seguridad social.

El 80% de las nuevas contrataciones laborales se realiza bajo estas modalidades.

En este proyecto se garantiza al trabajador la estabilidad en el empleo, derecho a la indemnización a partir del segundo mes de su ingreso y preaviso desde esa misma fecha.

En cuanto al aprendizaje, la ley lo transforma en un contrato laboral y ello con todos los derechos que, de esta condición surgen.

El proyecto garantiza el equilibrio de la negociación colectiva y ello con la representación de la organización sindical de la misma.

Como dijimos el trabajador tiene estabilidad en su empleo a partir del segundo mes de su ingreso. La reducción del período de prueba es consecuencia de la modificación del régimen indemnizatorio.

La posibilidad de la ampliación por convenio no libera al empleador de las obligaciones que surgen de la seguridad social y además garantiza al trabajador una indemnización mínima equivalente al 50% de la que le correspondería en una contratación sin que esta ampliación

Hoy la prórroga del período de prueba no sólo no crea obligaciones al empleador sino que además no da derecho al trabajador a ningún tipo de indemnización.

En síntesis, el proyecto garantiza el empleo estable, el goce del trabajador y su familia de los beneficios de la seguridad social. Esto tiene por finalidad restablecer al hombre como el centro de la economía.

**Sr. Meneghini.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Santiago del Estero.

**Sr. Meneghini.** — En el mismo sentido, solicito que se inserte un discurso que obra en Secretaría.

—Asentimiento.

—El texto de la inserción solicitada es el siguiente:

Señor presidente:

Considero un imperativo ético y político insoslayable tomar posiciones en este importante debate que tiene como eje fundamental la revisión de la legislación laboral vigente en el país.

En primer término, debo pronunciarme sobre qué posición filosófica y política tengo sobre el trabajo, decisión liminar que dará sustento y coherencia —creemos— a nuestra opinión.

Históricamente el trabajo fue considerado en distintas formas: así, en la antigüedad y buena parte de la Edad Media el trabajo físico era evaluado como una actividad degradante. Para Aristóteles era una actividad innoble, y se preferían el *otium* (la vida contemplativa) y la milicia guerrera.

Es en la Edad Moderna cuando la actividad humana que tiene por objeto transformar la naturaleza para cubrir sus necesidades, merece la atención de filósofos, políticos y economistas. Max Scheler vincula esta re-

valorización laboral con el desprecio que el hombre empieza a sentir hacia lo graciosamente otorgado.

Empieza a tener valor el esfuerzo personal. El hombre que se hace a sí mismo es el que gana prestigio y estimación. "El trabajo dignifica" pregonaba un slogan de amplia difusión en la década de los cincuenta en la Argentina.

El trabajo, entendido como acción humana tendiente a dominar la naturaleza para la consecución de bienes y servicios, ha constituido el cimiento de la civilización occidental.

Las fuentes de la dignidad del trabajo no deben buscarse principalmente en su dimensión objetiva sino en su dimensión subjetiva (Juan Pablo II, *Laborem Exercens*).

"El trabajo construye el mundo y libera al hombre de sus necesidades biológicas, de seguridad, psíquicas, de autosatisfacción y lo promueve. El hombre no es una máquina, es un ser con una vocación trascendente. Está sujeto a un orden moral; no es un objeto, sino el sujeto y protagonista de la vida y así debe considerársele" (Vázquez Vialard, *Derecho del trabajo y de la seguridad social*).

A esta concepción profundamente humanista, se opone la liberal que considera al trabajo como un factor de la producción (que ciertamente lo es como el propio capital), pero reducido a una simple mercadería que se compra y que se vende por el precio resultante de la concurrencia de la oferta de la masa laboral y la demanda de los empleadores.

El proyecto en análisis se inscribe en esta última visión, justificando la flexibilización para lograr mayor competitividad en la economía globalizada y por ende mayor producción y desarrollo económico, que sería la única forma de superar el alto índice de desempleo cuyas consecuencias debemos asumir como de responsabilidad colectiva prioritaria. Enumeremos sólo algunas:

- Incremento del desarraigo y de la marginalidad.
- Impacto en la seguridad pública, generando violencia social.
- Proceso de "desafiliación", en cuanto provoca el alejamiento y posterior ruptura de los vínculos familiares y del entorno social.
- Precarización, subutilización, ausencia de aportes patronales y carencia de obra social, situaciones que configuran una derogación de derechos que hacen a la dignidad humana.
- Aumento del costo fiscal, puesto que a mayor número de desocupados corresponden mayores erogaciones del Estado en cuanto a políticas públicas.
- Fomento de la conflictividad judicial porque la desocupación es una situación generadora de juicios laborales.
- Eficiente mecanismo de disuasión para encarar acciones de los trabajadores activos que pongan en peligro el mantenimiento del puesto de trabajo.
- Perjuicio a los sindicatos, puesto que su capacidad de presión se ve debilitada como consecuencia de

la reducción de su masa de afiliados y por el temor al desempleo de quienes están participando activamente en el mercado del trabajo.

-Deterioro de los mercados económicos internos, puesto que un desocupado equivale también a un "no-consumidor" (cf. J. Rifkin, *El fin del trabajo*).

-Desestímulo de proyectos inversores, ya que el desempleo masivo, las desigualdades irritantes, los ingresos insuficientes, etcétera, crean incertidumbre sobre una futura estabilidad política y social.

-Incidencias psicológicas con repercusiones en la salud física del desempleado (cf. Goran Therborn, se ha demostrado que las personas con experiencia de desempleo de larga duración, alcanzaban cotas mucho más altas en numerosos indicadores de riesgo de morbilidad y mortalidad por causa cardiovascular; el riesgo de muerte entre los hombres desempleados era un 61% superior que para los hombres empleados).

Revisemos someramente algunas de las causas que se invocan en foros económicos y laborales:

-Las medidas de política económica adoptadas en los '90, como la apertura de la economía con atraso cambiario -que obligó a las empresas a modificar la organización del trabajo de manera de obtener mayores aumentos de productividad- y la privatización de las empresas públicas, agravaron la situación del mercado laboral e incidieron en el crecimiento del desempleo.

-Los agregados monetarios, y ni hablar de los agregados financieros que se han multiplicado especulativamente encima de ese crecimiento monetario, se han expandido hiperbólicamente y no guardan proporción alguna con la actividad físico-económica que, al final de cuentas, los sostiene.

-La expansión económica hoy no va acompañada con la creación de puestos de trabajo suficientes como para absorber la oferta laboral.

-En los últimos 20 años se profundizó el proceso de concentración de los ingresos, y la consecuente caída de los ingresos de una parte creciente de la población desencadenó un proceso de movilidad social descendente que transformó la fisonomía social del país.

-Los trabajadores manufactureros se han vuelto una especie en extinción.

-La revolución informática y la mundialización de los intercambios están en vías de alumbrar un nuevo tipo de sociedad en los países industriales en la que los empleos tradicionales, estables y a tiempo completo van sencillamente a desaparecer.

-El alto costo laboral y las trabas que impusieron una rígida legislación para la contratación de mano de obra.

-La alta informalidad prevaleciente en el mercado de trabajo no permite implementar coberturas que aseguren al desocupado ingresos durante un período determinado mientras busca otro empleo.

Frente a este cuadro altamente preocupante, con índices que superaban el 18% de desocupados, más de un 20% de subocupados y un imposible conocimiento

de la llamada desocupación oculta (población económicamente activa que no concurre al mercado laboral, que ha desistido y no busca trabajo), el gobierno, ha actuado erráticamente, con imprevisión y con despreocupación, confiando en la "diestra y secreta mano" del mercado.

Pese a la recesión del '95 atribuida al impacto que sobre nuestra economía tuvo la crisis financiera de México, el gobierno insistió con una estrategia de intervención similar a la aplicada en los años de expansión de la economía, sin evaluar que la flexibilización laboral en momentos de recesión económica aumenta la informalidad.

La estrategia que privilegió el gobierno (fomentar el empleo a través de ofrecer incentivos a las empresas mediante la reducción de las contribuciones patronales o la flexibilización laboral) no parece haber dado hasta ahora los resultados esperados, ya que no sólo se crearon pocos puestos de trabajo, en relación con la magnitud del desempleo, sino que todos ellos fueron precarios.

Los diferentes programas llevados a cabo por el gobierno fueron discontinuos, superpuestos, ineficientes y contribuyeron a la precarización y la subutilización de la mano de obra.

Podemos concluir brevemente que desde 1989 a la fecha, la política laboral del gobierno ha permitido:

- 1.- La institucionalización de la precarización laboral.
- 2.- La tolerancia de prestaciones laborales, ilegales llamadas "trabajo en negro".
- 3.- La reducción unilateral de los salarios.
- 4.- Ausencia de contralor de las condiciones de trabajo, aumentándose los riesgos (ver en la fecha accidente en torre de Retiro - seis muertos).
- 5.- Se ha debilitado a la Justicia laboral, llegando al extremo de haber juzgados que no tienen sede física para el desempeño de sus funciones.

El derecho del trabajo se encuentra en crisis. Ha perdido su carácter protectorio y es oportuno recordar los conceptos de Rudolph von Ihering: "...el nacimiento del Derecho es siempre como el del hombre, un doloroso y difícil alumbramiento... Se puede decir de un derecho ganado sin esfuerzo, lo que se dice de los hijos de la cigüeña; un zorro o un huitre puede perfectamente robarles; pero ¿quién arrancará fácilmente al hijo de entre los brazos de su madre? ¿Quién despojará a un pueblo de sus instituciones y de sus derechos alcanzados a costa de su sangre? Bien puede afirmarse que la energía y el amor con que un pueblo defiende sus leyes y sus derechos, están en relación proporcional con los esfuerzos y trabajos que les haya costado el alcanzarlos. No es solamente la costumbre quien da vida a los lazos que ligan a los pueblos con su derecho, sino que el sacrificio es quien los hace más duraderos, y cuando Dios quiere la prosperidad de un pueblo, no se la da por caminos fáciles, sino que le hace ir por los caminos más difíciles y penosos."

La legislación del trabajo es un claro ejemplo de esa "lucha por el derecho" que introdujo al Estado como árbitro para equilibrar el desnivel producido entre las partes; que modificó el principio de la autonomía de la voluntad para lograr el equilibrio social.

No estoy convencido de que las normas que hoy se tratan vayan a restablecer la equidad y lograr la integración armónica de la sociedad.

Por todo ello, mi voto es por la negativa.

**Sr. Presidente.** - Una vez que se concrete la votación, haremos lo correspondiente con todas las inserciones solicitadas.

Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

**Sr. Varizat.** - Señor presidente: adelanto el voto negativo de mi bloque.

**Sr. Presidente.** - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el dictamen de mayoría.

-La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** - En consideración en particular.

-Se enuncia y aprueba el capítulo I, artículos 1º a 4º.

**Sr. López.** - Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** - Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. López.** - Señor presidente: le propongo a la mayoría, ya que este proyecto se votó en general y el bloque de la Unión Cívica Radical lo rechazó, que por lo menos podamos mejorar en algún aspecto las definiciones del régimen de pasantías.

Es notorio que el proyecto oficial en su artículo 2º deja librada la definición del contrato de pasantía a una resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. El contrato de pasantía está usándose como contrato basura sin garantizar ningún tipo de derecho de los pasantes implementado por resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. Nosotros, que presentamos proyectos y pedimos su reserva en mesa para tratarlos, le proponemos a la mayoría definir el contrato de pasantía en cuatro artículos.

**Sr. Presidente.** - Señor senador: lo que usted está pidiendo en forma reglamentaria es la reconsideración de lo que se acaba de votar.

El capítulo I fue votado; en consecuencia, en primer lugar corresponde la reconsideración de ese capítulo. Primero someteremos a reconsideración el capítulo I. Si hay reconsideración, luego lo discutiremos.

**Sr. López.** — Yo pensé que usted me había escuchado el pedido de palabra.

**Sr. Presidente.** — No, lo escuché después de que se votó. Usted debe saber que en la práctica parlamentaria, cada vez que los senadores se anotan para la discusión en particular, lo hacen por Secretaría. Yo no podía saber si usted iba a hablar en ese momento. El capítulo fue votado. Voy a someter primero la votación a reconsideración y, si se aprueba, trataremos su proyecto con mucho gusto. Aunque haya sido un error suyo o mío, lo cierto es que se votó, así que primero tengo que hacer votar su pedido de reconsideración.

**Sr. López.** — Señor presidente: entonces, le propongo al presidente de la comisión —que debe tener mi proyecto sobre su banca— que si esto se aprueba, se modifiquen el artículo 2º y los siguientes en función del capítulo de mi proyecto, que se llama “De las pasantías”. Allí se definen las pasantías y se aseguran los derechos del pasante.

**Sr. Presidente.** — Para la reconsideración se necesitan los dos tercios.

Se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Le pido al señor senador que lea el texto de su proyecto.

**Sr. López.** — Se define el contrato de pasantía en un artículo que diría: “El contrato de pasantía es el que se celebra entre un alumno, egresado de hasta dos años de antigüedad en el título, o docente de una entidad educativa, y una institución o persona pública o privada con el que aquélla haya celebrado un convenio de pasantías; para la prestación de servicios directamente vinculados con su educación, formación, título, carrera o especialización.”

El artículo siguiente diría: “Los convenios que se celebren entre una entidad educativa y una institución o persona pública o privada, además de los requisitos que determine la reglamentación, deberán establecer los objetivos educativos de la pasantía, describir la clase de práctica o actividad a que se refiera garantizando la adecuación de la prestación a la educación, formación, título, carrera o especialización del pasante, y asegurar su supervisión pedagógica.

“Asimismo, deberán prever la cobertura médico-asistencial del pasante durante el plazo de la pasantía, así como por los riesgos que pudiese sufrir por el hecho y en ocasión de aquélla.”

Señor presidente: lo que sucede es que los pasantes están siendo utilizados como “contrato ha-

sura”. Van a una institución con una finalidad de formación pedagógica y se carece de un mecanismo que asegure que el pasante esté siendo utilizado para esa actividad. Puede ser, que un pasante sea utilizado para acomodar mercaderías en las góndolas de un supermercado.

**Sr. Presidente.** — El señor senador por la Unión Cívica Radical propone entonces la modificación del artículo 2º incorporando dos normas por las que se establecen los resguardos para las pasantías.

**Sr. López.** — Señor presidente: voy a añadir una cosa más.

Una tercera norma a incorporar diría: “El Poder Ejecutivo reglamentará las condiciones a que se sujeta la celebración y ejecución del contrato de pasantía, el que deberá contener las siguientes estipulaciones mínimas:

“a) El plazo de la pasantía, que no podrá ser inferior a tres (3) meses ni superior a dos (2) años;

“b) La jornada de actividad, que no podrá ser diariamente inferior a dos horas ni superior a ocho;

“c) Una licencia anual de catorce días corridos cuando la relación supere un año de vigencia;

“d) La posibilidad de requerir la intervención de la entidad educativa para el caso de que el pasante sea destinado a tareas ajenas a aquellas para las que fue contratado”.

La idea es que la entidad educativa celebre un contrato con la institución. Supongamos que el organismo que contrata con la Universidad de Buenos Aires sea el Senado de la Nación. Se celebra un contrato en donde se establece que se va a capacitar a estudiantes pasantes en el Senado de la Nación en una determinada actividad, como la computación.

Se celebra entonces un contrato de pasantía con la Universidad de Buenos Aires, y ésta supervisa la formación que efectivamente se le da al pasante.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Tucumán.

**Sr. Miranda.** — Señor presidente: la comisión no va a aceptar la modificación propuesta.

Dicho con todo respeto, lamento que las propuestas se estén haciendo en el recinto, cuando éste es un proyecto que tiene estado parlamentario desde hace cuarenta días.

Lo único que nos llegó a la comisión fue una propuesta de la minoría que rechazaba en forma total y absoluta el proyecto que estamos considerando.

En virtud de que recién conocemos la propuesta del señor senador López, la comisión no va a hacer lugar a las modificaciones formuladas.

**Sr. Presidente.** — Se va a votar el Capítulo I con la redacción propuesta por la mayoría.

—La votación resulta afirmativa.

—Se enuncia el Capítulo II, artículos 5° a 11.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Yoma.** — Señor presidente: oportunamente presenté al presidente de la comisión una propuesta de modificación al artículo 11.

El artículo quedaría redactado de la siguiente manera: "Despido discriminatorio. Será considerado despido discriminatorio el originado en motivos de raza, nacionalidad, sexo, orientación sexual, religión, ideología, u opinión política o gremial".

**Sr. Presidente.** — Se agregarían "nacionalidad", "orientación sexual" e "ideología, u opinión política o gremial".

**Sr. Yoma.** — Señor presidente: esto lo dije en la sesión anterior.

Existe un debate respecto de la ley 23.592 —antidiscriminación—, a través de cuya aplicación existen algunos fallos que contemplan el sexo como una cuestión de género solamente y no incluyen la orientación sexual de la persona.

Con esta propuesta se salvaría el debate sobre la interpretación y, además, se incluiría el tema de la opinión política o gremial.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

**Sr. Miranda.** — Se acepta la propuesta, señor presidente.

**Sr. De la Sota.** — ¿Me permite, señor presidente?

**Sr. Presidente.** — Señor senador De la Sota...

**Sr. De la Sota.** — Pido que se incluya en la propuesta formulada por el señor senador por La Rioja la palabra "enfermedad", a efectos de evitar también cualquier tipo de discriminación a raíz, por ejemplo, de los casos de sida, ya que muchos de los afectados se presentaron diciendo que fueron discriminados y privados del empleo por padecer esa enfermedad.

**Sr. Presidente.** — La Presidencia ruega al señor senador Yoma que lea el texto definitivo del artículo en cuestión, esto es, con el agregado del término "enfermedad", a fin de que quede constancia en la versión taquigráfica.

**Sr. Yoma.** — Entonces, lo concerniente al despido discriminatorio, quedaría así: "Será considerado despido discriminatorio el originado en motivos de raza, nacionalidad, sexo, orientación sexual, religión, ideología, u opinión política o gremial...", pero no sé dónde incluir la palabra "enfermedad".

**Varios señores senadores.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** — Un momentito, señores senadores.

Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Maya.** — Señor presidente: creo que...

—Varios señores senadores hablan a la vez.

**Sr. Presidente.** — Por favor, no interrumpan al senador Maya.

**Sr. Maya.** — Y sin autorización, menos... (*Risas.*)

Considero que si hacemos un detalle taxativo de las causales que conducen a la valoración de la discriminación, corremos el grave riesgo de dejar algunas afuera del contenido de la ley.

Por ello, me parece que no es feliz detallar las causales de despido discriminatorio. Yo incluiría solamente un principio general. Inclusive, eliminaría "raza", "sexo" y "religión", haciendo referencia a "...el originado en motivos que no hagan a la idoneidad o fundamentación de la relación de trabajo". De esa forma, abarcaría todos los motivos que tienen el carácter de discriminatorios.

De la otra manera, consignando las alternativas en forma individual, tal vez alguna causa no sea tenida en mente y quede excluida. Por ello, creo que no es saludable ni feliz hacer una enumeración taxativa de las causas de discriminación.

**Varios señores senadores.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** — Sí, les voy a dar la palabra a todos con tranquilidad.

Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Alasino.** — No voy a hablar, sino que voy a dejar que exprese su opinión el señor presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social...

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Santiago del Estero.

**Sr. Alasino.** — Pero déjeme decir una cosa, señor presidente.

**Sr. Presidente.** — ¿Acaso no iba a ceder su lugar al presidente de la comisión?

**Sr. Alasino.** — Sólo quiero manifestar que el tema del despido discriminatorio está suficientemente elaborado por la jurisprudencia. Creo que ya se sabe cuáles son todos los tipos de despido discriminatorio que existen. De manera que, des-

de mi punto de vista, considero que lo que propone el señor senador Yoma es viable, pero me parece un poco peligroso incluir a las enfermedades, en general, porque eso corresponde a otro sistema, a otro régimen.

De todas maneras, los despidos arbitrario y discriminatorio están suficientemente definidos en la doctrina.

**Sr. Presidente.** — Con lo cual usted está más cerca de la tesis formulada por el señor senador Maya.

**Sr. Alasino.** — Creo que habría que dejar el texto como está.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Santiago del Estero.

**Sr. Vaquir.** — Señor presidente, señores senadores: desde mi humilde opinión, creo que el concepto "enfermedad" a los efectos del derecho de los trabajadores no existe si se lo considera científica o médicamente; porque no hay enfermedades sino enfermos o padecimientos de diverso grado y/o patologías que condicionan la capacidad laboral.

Por otra parte, el hecho de remarcar y puntualizar determinados factores de discriminación, como raza o religión, casi está indicando una mentalidad —me permitiría decir— de perfil discriminatorio.

Por eso adhiero a lo expresado por el señor senador Maya, de que al incluir el concepto "discriminación", en general, sin particularizar, quedarían salvadas todas las eventualidades posibles.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Yoma.** — Según la línea argumental sustentada por el señor senador Maya y abonada por otros colegas, habría que derogar la ley antidiscriminatoria, porque la Constitución únicamente exige el requisito de la idoneidad. La ley 23.592 específicamente hace referencia a las causas de discriminación.

**Sr. Maya.** — La propuesta formal...

**Sr. Yoma.** — No me interrumpa, señor senador.

**Sr. Presidente.** — Mucho menos, sin autorización...

**Sr. Yoma.** — Exactamente. *(Risas.)*

Por lo expuesto, voy a insistir en la redacción propuesta. Por lo demás, no es casual. Reitero que actualmente es motivo de debate a nivel doctrinario el hecho de si la ley antidiscriminatoria, cuando habla de sexo, se refiere al género o a la orientación sexual. Obviamente, esto puede provocar que

quienes tengan determinada conducta sexual se sientan excluidos de la protección de la ley antidiscriminatoria. Ese es el sentido de la reforma que propongo.

Coincidió con el señor senador De la Sota: una cosa es el despido arbitrario por enfermedad o la enfermedad, como causante de la cesación laboral, y otra es la discriminación por enfermedad.

Voy a apoyar la inclusión como causal de discriminación, y a continuación de "orientación sexual", de la expresión "enfermedad" porque creo que, desgraciadamente, en nuestra sociedad la discriminación por sida es un hecho cotidiano. Entonces, no es arbitrario que en la ley se indique que un trabajador considerará que su despido es discriminado si la causa de la finalización de la relación laboral es el sida.

Creo que con esta inclusión no haremos otra cosa que justicia.

Por lo expuesto, reitero mi adhesión a lo manifestado por el señor senador De la Sota.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Misiones del bloque de la Unión Cívica Radical.

**Sr. Losada.** — Señor presidente: ya que hablamos del tema de la discriminación, voy a formular una pregunta al presidente de la comisión.

¿Los cuarenta días eran exclusivamente para la bancada radical? Digo esto porque, por lo visto, hoy continuamos con la discusión.

—Murmillos en el recinto.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Tucumán, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

—Murmillos en el recinto.

**Sr. Presidente.** — Solicito a los señores senadores que no dialoguen.

**Sr. Miranda.** — El presidente de mi bloque se me adelantó —por algo es el jefe de la bancada.

La comisión va a aceptar la modificación sugerida en primera instancia por el colega senador por La Rioja, doctor Yoma, con exclusión de la parte relativa a enfermedad.

**Sr. Presidente.** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Capítulo II, con la modificación propuesta por el senador por La Rioja y aceptada por el señor presidente de la comisión.

—La votación resulta afirmativa.

—Se enuncia el Capítulo III, artículos 12 a



**Sr. Secretario** (PiuZZi). — La Secretaría informa que el señor presidente de la comisión hizo llegar a la mesa un agregado al artículo 12 que, como último párrafo, dice lo siguiente: "Las cláusulas de acuerdos bilaterales que establezcan y financien regímenes jubilatorios complementarios, sólo podrán ser modificadas por acuerdos de partes".

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

**Sr. Cafiero.** — Señor presidente: quiero referirme a la última parte del artículo 15.

No sé si éste es el momento apropiado para hacerlo.

**Sr. Presidente.** — Sí, señor senador. Estamos considerando el Capítulo III, que incluye los artículos 12 a 16.

**Sr. Tell.** — Señor presidente: como autor de la propuesta, quería referirme al agregado que acaba de leerse.

**Sr. Presidente.** — Pido disculpas al señor senador por Jujuy.

Pensé que el agregado había sido propuesto por el señor presidente de la comisión. Entonces, para referirse a la modificación propuesta al artículo 12, tiene la palabra el señor senador por Tucumán.

**Sr. Tell.** — Señor presidente: se encuentra en consideración del Honorable Senado el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social sobre las modificaciones a la ley de contrato de trabajo y asociaciones profesionales.

En el citado dictamen se avanza en la creación de mecanismos de arbitraje, conciliación y caducidad de los convenios colectivos de trabajo vigentes.

Es motivo de preocupación de quien habla, señor presidente, la situación de incertidumbre que generará la sanción de esta iniciativa en cuanto al tratamiento de los aportes y contribuciones que financian el régimen jubilatorio complementario establecido en acuerdos bilaterales vigentes.

Dichos aportes y contribuciones financian actualmente este régimen. Entiendo, señor presidente, que la naturaleza de tales aportes y contribuciones hace imposible su eliminación sin un análisis previo sobre el impacto social que tal medida puede ocasionar.

Esta es una razón más que suficiente para proponer la modificación que obra en Secretaría, que pongo en consideración del cuerpo para su votación afirmativa.

**Sr. Presidente.** — ¿Es el texto que acaba de leerse?

**Sr. Tell.** — Así es, señor presidente.

**Sr. Presidente.** — La Secretaría Parlamentaria creía que la propuesta era del señor presidente de la comisión. Por eso no había concedido el uso de la palabra al señor senador Tell.

Vamos a escuchar todas las propuestas que los señores senadores quieran realizar sobre este capítulo para que luego sean contestadas en conjunto por el señor presidente de la comisión.

Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

**Sr. Cafiero.** — Señor presidente: quiero proponer dos modificaciones al artículo 15.

Con respecto al primer párrafo, sostengo que la forma de aplicar las normas legales sobre jornadas y descansos debe estar limitada siempre que esté justificada por razones económicas, organizativas o tecnológicas.

Es decir, la aplicación de modalidades de jornadas y descansos previstas en la disponibilidad colectiva que este proyecto autoriza debe tener un fundamento. No pueden ser modalidades absolutamente caprichosas.

El empleador tiene que justificar que para estas nuevas normas existen razones organizativas, tecnológicas o económicas. La simple admisión de que son solamente para mejorar la rentabilidad de la empresa no debe ser el fundamento de la flexibilización laboral.

Esta es la primera modificación que propongo.

**Sr. Presidente.** — ¿Cuál sería el texto, senador?

**Sr. Cafiero.** — Sería éste: "...la forma de aplicar las normas legales sobre jornadas y descansos, siempre que estén justificadas en razones organizativas, tecnológicas o económicas...", y luego sigue tal como figura en el proyecto.

**Sr. Presidente.** — Está claro para la Presidencia. Espero que también lo esté para la comisión.

**Sr. Cafiero.** — Tengo otra modificación sobre el mismo artículo.

**Sr. Presidente.** — Por favor, léala ahora; así el presidente de la comisión contesta después todas las propuestas.

**Sr. Cafiero.** — Es en la última parte del artículo 15.

El texto dice: "La facultad de acordar la disponibilidad colectiva prevista en el presente artículo

queda condicionada a la generación de empleo". Propongo que se agregue: "o a la distribución equitativa de la mayor productividad resultante". Voy a explicar por qué.

El convenio colectivo de trabajo fue históricamente la forma en que los trabajadores defendieron un reparto más equitativo de la renta. En épocas de alta inflación, la variable de ajuste era el nivel de los salarios. A través de la convención colectiva no sólo se discutían condiciones de trabajo, sino también nivel de salario. Con ello, tratando de paliar los efectos corrosivos sobre el poder adquisitivo del salario que producía la inflación, las negociaciones colectivas de trabajo autorizaban los márgenes de corrección salarial que todos, en una larga historia, hemos conocido en su momento.

Pero este factor ha desaparecido. Hoy ya no se discuten niveles de salario en virtud de la inflación, porque ésta ha desaparecido. Entonces, ¿cual es la variable de ajuste? La productividad del trabajo.

En un tiempo se decía que el crecimiento de los salarios, más allá que la productividad del trabajo, era lo que generaba la inflación. Ahora estamos en el proceso inverso: se aumenta la productividad del trabajo y los salarios caen. Esto es así porque se ha producido una apropiación de los beneficios de la mayor productividad del trabajo por parte de la clase empresarial.

Obsérven que, como dije cuando se discutió el proyecto en general, la Argentina es probablemente el país con más alza de productividad en el mundo. En estos últimos siete años hemos aumentado la productividad del trabajo en 65 por ciento. Pensemos cuánto aumentaron los salarios para tener una idea de que aquí hay una apropiación que contradice las normas del equilibrio neoclásico.

Para los economistas neoclásicos, todo aumento de la productividad del trabajo va al salario o a la rebaja de precios. Por el mismo funcionamiento de la ley de mercado, la clase empresarial o capitalista nunca se apropia de estos beneficios.

Por esto propongo una norma muy clara y, a mi modo de ver, muy trascendente, dado que permite que el mundo obrero no haga de la productividad un tema que pueda resultarle peligroso o ingrato por definición: tiene que hacer de la productividad y de su reparto equitativo la base de las negociaciones colectivas del futuro.

Así, cuando el proyecto dice: "La facultad de acordar la disponibilidad colectiva prevista en el presente artículo queda condicionada a la genera-

ción de empleo"—cosa que me parece muy bien— propongo agregar "o a la distribución equitativa de la mayor productividad resultante".

Esta es la segunda modificación que planteo.

**Sr. Presidente.** — ¿Hay alguna otra propuesta de modificación en este Capítulo?

**Sr. León.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

**Sr. León.** — Deseo preguntar al presidente de la Comisión si llegó alguna información sobre la declaración del ministro de Trabajo sobre posibles reformas al proyecto de ley en consideración.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor presidente de la comisión para responder a las dos propuestas que se han formulado —de los señores senadores Tell y Cafiero, respectivamente— y a la pregunta del señor senador León.

**Sr. Miranda.** — Señor presidente: la Comisión acepta el agregado propuesto por el señor senador Tell al artículo 12, que obra en Secretaría.

En cuanto a la propuesta formulada por el señor senador por Buenos Aires, la Comisión no acepta la modificación.

**Sr. Cafiero.** — ¿Ninguna de las dos?

**Sr. Miranda.** — Ninguna de las dos.

**Sr. Cafiero.** — Que se voten.

**Sr. Yoma.** — ¿No se aceptan?

**Sr. Miranda.** — No.

En cuanto a la pregunta formulada por el señor senador por el Chaco, el presidente de nuestra bancada fue muy claro al decir que toda ley siempre es perfectible. De lo que se está hablando es de cambiar un régimen de indemnización por un régimen de capitalización. Pero esto no será en un futuro inmediato sino mediato.

**Sr. León.** — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

**Sr. Miranda.** — Cómo no.

**Sr. Presidente.** — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

**Sr. León.** — Seguramente es perfectible, aunque se trate de más de cuarenta días.

**Sr. Presidente.** — Señor senador Cafiero: durante la exposición del señor presidente de la Comisión usted dijo algo que no entendí bien. ¿Qué quiere que se vote?

**Sr. Cafiero.** — Las modificaciones propuestas.

**Sr. Presidente.** — Voy a poner a votación el texto de la Comisión. Debe ser así reglamentariamente. Si no se lo aprueba...

**Sr. Cafiero.** — Me rindo ante el Reglamento pero no ante la injusticia. (*Risas.*)

**Sr. Presidente.** — Usted, señor senador, podría pedir que ese artículo se vote separadamente.

**Sr. Cafiero.** — Así lo pido, señor presidente.

**Sr. Presidente.** — Eso es posible.

Entonces, en primer lugar se va a votar el Capítulo III sin el artículo 15 y después el artículo 15.

Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

**Sr. de la Sota.** — Señor presidente: en conocimiento de su interpretación reglamentaria, manifiesto mi adhesión a las modificaciones propuestas por el señor senador por Buenos Aires.

**Sr. Presidente.** — En primer lugar, se va a votar el Capítulo III, sin el artículo 15, con la modificación propuesta por el señor senador Tell, aceptada por la Comisión.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — A continuación, se va a votar el artículo 15. En primer lugar, con la redacción propuesta por la Comisión, como corresponde.

—Se practica la votación.

**Sr. Presidente.** — Aprobada la propuesta de la Comisión.

**Sr. de la Sota.** — ¿Con cuántos votos?

**Sr. Presidente.** — Señor senador: hubo solamente tres manos que no se levantaron.

—Varios señores senadores hablan a la vez.

**Sr. Presidente.** — Si algún señor senador quiere pedir la rectificación de la votación, que lo haga de viva voz y la voy a someter a votación.

**Sr. Mac Karthy.** — Pido la rectificación.

**Sr. Presidente.** — Se va a votar el pedido de rectificación formulado por el señor senador por el Chubut.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Se va a votar nuevamente el artículo 15 con la redacción propuesta por la Comisión. Por Secretaría se contarán los votos.

—Se practica la votación.

**Sr. Presidente.** — Sobre un total de 57 senadores, han votado 30 por la afirmativa y 27 por la negativa. En consecuencia, queda aprobado el ar-

tículo 15 con la redacción propuesta por la Comisión.

Continuamos con la consideración del Capítulo IV.

—Se enuncia el Capítulo IV, artículos 17 a 22.

**Sr. Secretario (Piuze).** — La Secretaría informa que obra en este estrado una propuesta de modificación al artículo 17, a través de la cual se elimina el primer renglón del primer párrafo y se agrega un texto como último párrafo.

**Sr. Presidente.** — Pregunto al señor presidente de la Comisión de quién es la propuesta de modificación.

**Sr. Miranda.** — De la Comisión.

**Sr. Presidente.** — En primer lugar, por Secretaría se va a dar lectura a la propuesta de la Comisión, por la que se modifica el artículo 17.

**Sr. Secretario (Piuze).** — La propuesta dice: "Eliminar del primer párrafo del artículo 17 'las cuales deberán ser equivalentes a la actividad del principal'".

Y también se propone agregar como último párrafo del mismo artículo 17: "Las disposiciones insertas en este artículo resultan aplicables al régimen de solidaridad específico previsto en el artículo 32 de la ley 22.250".

**Sr. Presidente.** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Capítulo IV con la modificación propuesta por la Comisión.

—La votación resulta afirmativa.

—El artículo 23 es de forma.

**Sr. Presidente.** — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

**Sr. Miranda.** — Señor presidente: el artículo 22, que contiene una cláusula transitoria, debe ser modificado. El texto correspondiente obra en Secretaría.

**Sr. Presidente.** — Lo que sucede es que el embajador se distrajo. (*Risas.*)

**Sr. Secretario (Piuze).** — El artículo 22 se reemplaza en forma total, por el siguiente texto: "Cláusula transitoria. Los contratos celebrados, hasta la entrada en vigencia de la presente ley, bajo las modalidades previstas en los artículos 43 a 65 de la ley 24.013 y en los artículos 3º y 4º de la ley 24.465 que por la presente se derogan, continuarán hasta su finalización no pudiendo ser renovados ni prorrogados".

**Sr. Presidente.** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se reconsidera la votación del último artículo.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 22 con la modificación propuesta por la Comisión.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — En consecuencia, queda sancionado el proyecto de ley<sup>1</sup>. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

Corresponde votar las inserciones solicitadas por los señores senadores, entre las que se encuentra un texto alternativo propuesto por el señor senador León.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Se procederá en consecuencia.

**Sr. Cantarero.** — ¿Qué se votó, señor presidente?

**Sr. Presidente.** — La votación implicó aceptar todas las inserciones que se solicitaron.

## 9

### ENTE COORDINADOR DEL TRANSPORTE METROPOLITANO

**Sr. Presidente.** — Pasamos a los órdenes del día.

En primer lugar, corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Transportes y de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de ley en revisión por el que se crea el Ente Coordinador del Transporte Metropolitano (ECOTAM). (Orden del Día N° 76.)

Por Secretaría se dará lectura.

**Sr. Secretario (PiuZZi).** — (Lee:)

#### Dictamen de comisión

#### Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Transportes y de Asuntos Administrativos y Municipales han considerado el proyecto de ley venido en revisión creando el Ente Coordinador del Transporte Metropolitano (ECOTAM), expediente C.D.-76/97; y, por las razones que dará el miembro informante os aconsejan su aprobación.

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 122 del Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 20 de noviembre de 1997.

*José M. de la Sota. — Julio A. San Millán. — César Mac Karthy. — José A. Romero Ferris. — Pedro C. Maranguello. — Enrique Martínez Abundecar. — Luis A. León. — Julio C. Humada. — Horacio A. Zalazar. — Edgardo Gagliardi. — José L. Gioja. — Raúl A. Galván.*

• Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

(13 de agosto de 1997.)

#### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, ...*

### ENTE COORDINADOR DEL TRANSPORTE METROPOLITANO (ECOTAM)

Artículo 1° — Créase un organismo interjurisdiccional integrado por el Poder Ejecutivo nacional, el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires —o la designación que en el futuro la autoridad competente le diera a dicha jurisdicción— que se denominará Ente Coordinador del Transporte Metropolitano (ECOTAM), cuyo objeto es tener a su cargo la planificación y coordinación del sistema de transporte urbano e interurbano interjurisdiccional en el área metropolitana de Buenos Aires.

Art. 2° — El área metropolitana de Buenos Aires comprende el territorio de la Capital Federal —o la designación que en el futuro la autoridad competente le diera a dicha jurisdicción— y los siguientes partidos de la provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezzeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Lobos, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Mercedes, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Punta Indio, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, Zárate y los que en el futuro deban ser incluidos como consecuencia del desarrollo urbano cuando las relaciones funcionales del área así lo requieran.

Art. 3° — El ente tendrá su asiento en la ciudad de Buenos Aires —o la designación que en el futuro la autoridad competente le diera a dicha jurisdicción— o en la provincia de Buenos Aires.

Art. 4° — La dirección superior del ente estará a cargo de un directorio integrado en forma indelegable por el secretario de Obras y Servicios Públicos de la Nación, el ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires y el secretario de Producción y Servicios de la ciudad de Buenos Aires —o la designación que en el futuro la autoridad competente le diera a dicha jurisdicción— o de los

<sup>1</sup> Ver el Apéndice.